



Asamblea General

Distr. general
29 de marzo de 2018
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

36º período de sesiones

11 a 29 de septiembre de 2017

Temas 2 y 5 de la agenda

**Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del
Alto Comisionado y del Secretario General**

Órganos y mecanismos de derechos humanos

Cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos* **

Informe del Secretario General

Resumen

Este informe se presenta de conformidad con la resolución 12/2 del Consejo de Derechos Humanos. En él, el Secretario General pone de relieve los últimos acontecimientos que han tenido lugar dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas en relación con la cuestión de las represalias. Presenta las actividades del Subsecretario General de Derechos Humanos en su calidad de alto funcionario del sistema de las Naciones Unidas encargado de las iniciativas para abordar los actos de intimidación o represalia contra quienes tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos. El informe también contiene información sobre los presuntos actos de intimidación y represalia, en particular para dar seguimiento a los casos incluidos en el informe anterior (A/HRC/33/19). Se adjunta información más pormenorizada sobre determinados casos (véase el anexo I). El Secretario General concluye el informe con recomendaciones encaminadas a abordar y prevenir todos esos casos.

* Este informe se ha presentado con retraso para incluir en él la información más reciente.

** Los anexos del presente informe se distribuyen tal como se recibieron.



Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción	3
II. Evolución de la situación en respuesta a los actos de intimidación y represalia	3
III. Acceso a las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos	5
IV. Información recibida sobre casos de intimidación o represalia motivados por la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos	5
A. Observaciones generales	5
B. Resumen de los casos	7
V. Conclusiones y recomendaciones	16
 Anexos	
I. Comprehensive information on alleged cases of intimidation or reprisal for cooperation with the United Nations on human rights	18
II. Information on alleged cases included in the previous report	35

I. Introducción

1. En su resolución 12/2, el Consejo de Derechos Humanos expresó su preocupación por los persistentes informes sobre actos de intimidación y represalia contra los particulares y los grupos que trataban de cooperar o habían cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, y su profunda preocupación por la gravedad de las represalias denunciadas. El Consejo condenó todo acto de intimidación o represalia de los gobiernos y los agentes no estatales y me invitó a que presentara al Consejo en su 14º período de sesiones, y anualmente en lo sucesivo, de conformidad con su programa de trabajo, un informe con una recopilación y un análisis de toda la información disponible, de todas las fuentes pertinentes, sobre presuntas represalias, así como recomendaciones sobre la forma de hacer frente a este problema. El presente informe es el octavo que se prepara de conformidad con la resolución 12/2¹.

II. Evolución de la situación en respuesta a los actos de intimidación y represalia

2. Alarmado por el aumento del número de denuncias de casos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, en octubre de 2016 el anterior Secretario General designó al Subsecretario General de Derechos Humanos como alto funcionario para encabezar los esfuerzos dentro del sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a actos de intimidación y represalia contra quienes cooperaban con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. Esta decisión reflejó el reconocimiento por la Organización de que esos actos eran inaceptables, y subrayó la necesidad de fortalecer la acción en todo el sistema para prevenirlos, responder a ellos y hacerles frente. Hacer frente a las represalias y la intimidación es una prioridad y una responsabilidad fundamental de la Organización en su conjunto.

3. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a la cuestión de las represalias tomadas en varias ocasiones por funcionarios públicos contra personas que colaboraban con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, en particular el 7 de junio de 2017, en su declaración ante el Consejo de Derechos Humanos en su 35º período de sesiones. El Alto Comisionado destacó que su propio personal, los procedimientos especiales y los órganos creados en virtud de tratados dependían de los miembros de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como de muchos otros, para recabar ideas e información. Subrayó que, cuando el Gobierno u otros funcionarios intimidaban, detenían o causaban daño a personas, atentaban contra un elemento fundamental de la labor de las Naciones Unidas.

4. Varios Estados y organizaciones no gubernamentales (ONG) también han formulado declaraciones sobre la cuestión de las represalias; por ejemplo, el 16 de marzo de 2017, durante el 34º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el grupo básico sobre represalias (Fiji, Ghana, Hungría, Irlanda y Uruguay), en nombre de un grupo de 67 Estados, expresó profunda preocupación ante la persistencia de las represalias e instó a todos los Estados a que impidieran ese tipo de actos y se abstuvieran de cometerlos, y acogió con satisfacción la designación de un alto funcionario para dirigir las iniciativas de las Naciones Unidas en relación con esta cuestión.

5. Durante su reunión anual, celebrada en julio de 2016, los Presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos recomendaron la aplicación por todos los órganos creados en virtud de tratados de las Directrices contra la Intimidación o las Represalias (Directrices de San José) (HRI/MC/2015/6) aprobadas en su reunión de 2015 (véase A/71/270). Hasta la fecha, las Directrices han sido refrendadas por ocho de los diez órganos de tratados, que han designado relatores, coordinadores, o grupos de trabajo sobre

¹ Véanse A/HRC/14/19, A/HRC/18/19, A/HRC/21/18, A/HRC/24/29, A/HRC/27/38, A/HRC/30/29 y A/HRC/33/19.

las represalias y la intimidación, para armonizar los diferentes enfoques adoptados por los órganos creados en virtud de tratados y proponer medidas.

6. Como parte de la respuesta mejorada de los procedimientos especiales a las represalias, aprobada en 2015, en junio de 2016 Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, fue nombrada punto focal del Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales. El informe anual de los procedimientos especiales para 2017 incluía una sección sobre la intimidación y las represalias, en la que se describían las diversas medidas adoptadas por los titulares de mandatos para hacer frente a estos actos, que según se había observado, se habían vuelto cada vez más violentos (A/HRC/34/34, cap. IV). El 15 de marzo de 2017, la Presidenta del Comité de Coordinación, presentando el informe anual de los procedimientos especiales al Consejo de Derechos Humanos en su 34º período de sesiones, afirmó el empeño de los titulares de mandatos por combatir las represalias contra quienes colaboraban con ellos, lo cual, subrayó, socavaba la capacidad de los procedimientos especiales para llevar a cabo su labor.

7. En el sistema de las Naciones Unidas también se han emprendido iniciativas de sensibilización sobre esta cuestión; por ejemplo, en la Nota de Orientación sobre los Derechos Humanos para los Coordinadores Residentes y los Equipos de las Naciones Unidas para 2016, se señaló específicamente la importante función que desempeñaban las presencias sobre el terreno en el contexto de la respuesta a las represalias y la intimidación. En la Nota también se subrayó que, para hacer frente al riesgo de represalias y proteger la seguridad de las personas se requería una respuesta coordinada y unificada por parte de los coordinadores residentes y los equipos de las Naciones Unidas, entre otras cosas recurriendo al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) cuando fuera necesario.

8. Para aprovechar la labor en curso de esos otros agentes, en esta fase inicial de su trabajo, el alto funcionario que encabeza los esfuerzos en el sistema de las Naciones Unidas se centra en las tres esferas siguientes: a) mejorar la participación de alto nivel en la cuestión de las represalias, incluida la prevención de estas, y asegurar que se adopten las medidas apropiadas cuando se cometen, en particular en casos urgentes; b) elaborar una respuesta más amplia para la prevención y lucha contra la intimidación y las represalias en todo el sistema de las Naciones Unidas; y c) asegurar la cooperación con todos los interesados, especialmente los Estados Miembros y los agentes de la sociedad civil, para el fortalecimiento de los esfuerzos en curso.

9. Un aspecto esencial de las actividades del Subsecretario General de Derechos Humanos consiste en ocuparse de situaciones concretas y de casos individuales con los Estados Miembros en los foros intergubernamentales y mediante la diplomacia discreta con los Gobiernos interesados. Esta colaboración ha incluido el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad y la Comisión de Consolidación de la Paz, así como a los representantes permanentes ante las Naciones Unidas. Sobre la base de la información recibida de los asociados de las Naciones Unidas, los mecanismos de derechos humanos, la sociedad civil y directamente de las personas y los grupos afectados, el Subsecretario General ha planteado casos urgentes concretos, patrones persistentes de intimidación y represalia, situaciones en que las medidas adoptadas por otros agentes no han producido cambios tangibles y otros incidentes en la Sede y durante visitas sobre el terreno.

10. El Subsecretario General de Derechos Humanos también ha participado en actividades de divulgación dirigidas a órganos y mecanismos de derechos humanos, como el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados, los representantes especiales del Secretario General y los coordinadores residentes, los coordinadores de derechos humanos de toda la Secretaría de las Naciones Unidas y los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas. Se ha iniciado entre las entidades de las Naciones Unidas un examen de los mecanismos de respuesta que servirá de base para el establecimiento de un sistema más amplio con miras a documentar los casos de intimidación y represalias en toda la Organización y responder a ellos.

11. A fin de garantizar la visibilidad y accesibilidad de la labor sobre la intimidación y la represalia y las actividades de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a este respecto, en junio de 2017 se creó un sitio web especial que trata en particular de la forma de presentar la información a los órganos pertinentes². Los procedimientos especiales también tienen su propia página sobre esta cuestión.

III. Acceso a las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos

12. En sus informes anteriores, el ex Secretario General se refirió al papel del Comité encargado de las Organizaciones No Gubernamentales, que examina las solicitudes de las organizaciones que desean ser reconocidas como entidades de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social. Instó al Comité a que aplicara los criterios de evaluación de las organizaciones de manera justa y transparente, ya que la contribución de las organizaciones de la sociedad civil es indispensable para la labor y los propósitos mismos de las Naciones Unidas, que sería imposible sin su acceso a las reuniones internacionales en los locales de las Naciones Unidas y su capacidad para colaborar directamente con los mecanismos de derechos humanos. Esta cuestión fue abordada por los titulares de mandatos de los procedimientos especiales en una carta de abril de 2017 dirigida al Comité (A/HRC/36/25, párr. 13, OTH 5/2017), en la que expresaron preocupación por las decisiones del Comité relativas a la concesión de acreditación a las organizaciones de la sociedad civil, y sus métodos de trabajo en general, que podrían, según los titulares de mandatos, obstaculizar el acceso de la sociedad civil a las Naciones Unidas, por lo que afectan a su participación. También expresaron su preocupación en particular por el aplazamiento arbitrario de solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas de ONG, lo que podría impedirles colaborar con órganos de las Naciones Unidas y mecanismos de derechos humanos. El Presidente del Comité respondió a las inquietudes planteadas señalando que a partir de ese momento los períodos de sesiones del Comité se transmitirían en la web. Acojo con beneplácito estos acontecimientos, que darán mayor transparencia a la labor del Comité y lo exhorto a aplicar los criterios de evaluación de las organizaciones de manera justa y transparente.

IV. Información recibida sobre casos de intimidación o represalia motivados por la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos

A. Observaciones generales

13. El presente informe incluye datos sobre casos recopilados entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017 y, de conformidad con las resoluciones 12/2 y 24/24 del Consejo de Derechos Humanos, también contiene información sobre actos de intimidación o represalia contra quienes:

- Tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o han prestado testimonio ante ellos o les han proporcionado información.
- Recurren o han recurrido a los procedimientos establecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y todos los que les han prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin.

² Véase la página web del ACNUDH, “Intimidación y represalia contra quienes colaboran con las Naciones Unidas en materia de derechos humanos” (<http://www.ohchr.org/SP/Issues/Reprisals/Pages/ReprisalsIndex.aspx>).

- Presentan o han presentado comunicaciones con arreglo a los procedimientos establecidos en los instrumentos de derechos humanos, y todos los que les han prestado asistencia jurídica o de otra índole a tal fin.
- Son familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos o de quienes han prestado asistencia jurídica o de otra índole a las víctimas.

14. La información recibida se ha cotejado con las fuentes primarias y ha sido corroborada por otras fuentes en la mayor medida posible. Se hace referencia a varias publicaciones de las Naciones Unidas en que se hicieron públicos por primera vez los casos que figuran en el presente informe. También se incluyen las respuestas proporcionadas por los Gobiernos hasta el 31 de julio de 2017, tanto por escrito como verbalmente, durante los períodos de sesiones de los órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, se hicieron esfuerzos para dar seguimiento a los casos que figuran en el informe anterior del Secretario General (véase el anexo II).

15. En el presente informe no se pretende dar una lista exhaustiva de los casos. En su preparación, se cumplió estrictamente el principio de “no hacer daño” y de recabar el consentimiento de las presuntas víctimas, y se llevó a cabo una evaluación de los riesgos para cada caso recibido y considerado verosímil. Como resultado de ello, se decidió no incluir los casos en que se consideraba que el riesgo para la seguridad y el bienestar de las personas en cuestión, o sus familiares, era demasiado elevado. Además, varios casos que se han señalado a mi atención se han abordado de manera confidencial y podrían no figurar en el informe.

16. Durante el período que se examina, los particulares y los grupos que deseaban colaborar con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas han sido objeto de actos de intimidación y represalia por su colaboración con una amplia gama de órganos, procesos y agentes. He recibido información sobre amenazas, intimidación o represalias contra quienes colaboraron en relación con cuestiones de derechos humanos con el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el mecanismo del examen periódico universal. Los contactos con el ACNUDH y los componentes de derechos humanos de las misiones de paz tampoco estaban exentos de este tipo de castigos, por ejemplo, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) y la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS). Otros también han sufrido graves consecuencias por tratar de asistir a reuniones de la Organización Internacional del Trabajo o de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Copenhague y presentar allí denuncias. Algunos agentes han recibido amenazas, en algunos casos de muerte, por el solo hecho de haber participado en programas de formación organizados por las fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

17. Algunas denuncias de represalia han sido abordadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, las presencias del ACNUDH sobre el terreno y las misiones de paz. El Subsecretario General de Derechos Humanos, en su calidad de alto funcionario que encabeza la respuesta a las represalias, celebró reuniones con representantes de Estados y envió cartas a Gobiernos sobre casos de personas que colaboraron en la esfera de los derechos humanos con las presencias del ACNUDH sobre el terreno que fueron amenazadas a causa de sus actividades por las autoridades locales; sobre proyectos de ley que restringían la cooperación con organizaciones extranjeras sin autorización previa; sobre casos en que se impidió a particulares cooperar con mecanismos de derechos humanos; en que la acreditación de un defensor de los derechos humanos fue revocada por las Naciones Unidas; o casos de represalias por cooperar con componentes de derechos humanos de las misiones de paz.

18. Asimismo, los dos últimos Presidentes del Consejo de Derechos Humanos utilizaron sus buenos oficios para examinar las denuncias de intimidación y represalias contra quienes colaboran con el Consejo, como la prohibición de viajar, la intimidación de los

representantes de la sociedad civil por las misiones permanentes, campañas difamatorias o amenazantes en los medios de comunicación, o acoso, detenciones arbitrarias o enjuiciamiento tras colaborar con el Consejo y sus mecanismos, incluso directamente con los representantes diplomáticos de seis países. Estas medidas contribuyen a atraer una mayor atención hacia esos casos y alientan la acción positiva de los Gobiernos.

B. Resumen de los casos

19. En el anexo I se incluye más información sobre los casos que figuran a continuación.

1. Argelia

20. El 31 de marzo de 2017, algunos titulares de mandatos expresaron su preocupación al Gobierno de Argelia por las denuncias de represalias contra Rafik Belamrania, miembro fundador de la Association pour les enfants des disparus forcés en Algérie – Mish'al, por haber publicado en Facebook, el 14 de febrero de 2017, una decisión adoptada por el Comité de Derechos Humanos en relación con la ejecución sumaria de su padre en 1995 (véase A/HRC/36/25, párr. 13, DZA 2/2017).

2. Bahrein

21. En vista de la grave tendencia actual de acoso e intimidación contra los defensores de los derechos humanos, la imposición de la prohibición de viajar a determinadas personas, la detención, la reclusión y los malos tratos de personas seleccionadas, y un caso de agresión sexual y tortura como forma de represalia, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales y el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, que estuvieron en contacto con el Gobierno de Bahrein en relación con estos casos, examinaron las correspondientes denuncias. El Subsecretario General de Derechos Humanos se dirigió por escrito al Gobierno acerca de los casos denunciados. Los procedimientos especiales han expresado preocupación por una campaña de represión organizada contra la sociedad civil, destacando que las autoridades han recurrido a medidas drásticas para frenar las opiniones disidentes, incluidas represalias por cooperar con las Naciones Unidas, y en particular con el ACNUDH (véase A/HRC/34/75, párr. 10, BHR 4/2016 y BHR 7/2016).

22. Los procedimientos especiales recibieron varias denuncias acerca de la prohibición de viajar presuntamente impuesta a los defensores de los derechos humanos por su cooperación con las Naciones Unidas y su mecanismo de derechos humanos, en particular con el Consejo de Derechos Humanos, y con la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su 22º período de sesiones, o en seminarios de derechos humanos.

23. El 21 de junio de 2016, el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el hecho de que Nabeel Rajab, cofundador del Centro para los Derechos Humanos de Bahrein, fue detenido el 13 de junio de 2016 por “difundir noticias falsas y rumores sobre la situación interna en un intento de desacreditar a Bahrein”. El Sr. Rajab había sido objeto de una prohibición de viajar al menos desde enero de 2015. El Alto Comisionado expresa su preocupación por el hecho de que estas y medidas posteriores contra el Sr. Rajab puedan estar vinculadas a su colaboración con el Consejo de Derechos Humanos.

3. Burundi

24. El Comité contra la Tortura adoptó medidas en relación con las denuncias de represalia contra los representantes de las ONG de Burundi que enviaban informes y participaban en los períodos de sesiones del Comité, en los que se examinaba la situación en Burundi. Cuatro representantes eran abogados, tres de los cuales posteriormente fueron expulsados del Colegio de Abogados y uno de ellos suspendido durante un año a petición del Fiscal General de Buyumbura. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que la petición del Fiscal General guardara relación con la cooperación de estos miembros de la

sociedad civil con el Comité. Este ha estado en contacto con el Gobierno respecto de esta cuestión (véase CAT/C/BDI/CO/2/Add.1).

25. Los expertos que llevaron a cabo la investigación independiente sobre Burundi, realizada en virtud de la resolución S-24/1 del Consejo de Derechos Humanos, en su informe (A/HRC/33/37), también expresaron preocupaciones por la amenaza de represalias contra las personas que cooperaban o deseaban cooperar con la investigación, y señalaron que la investigación se enfrentaba a varios desafíos, entre ellos el hecho de que dos de sus cuatro visitas previstas no podían llevarse a cabo. Señalaron además que algunas víctimas y testigos temían represalias. En sus recomendaciones, los expertos destacaron que el Gobierno debía cesar inmediatamente las represalias y amenazas contra las personas que habían cooperado con los expertos independientes y otros mecanismos y organizaciones de derechos humanos.

26. El 14 de junio de 2017, la Presidenta de la Comisión de Investigación sobre Burundi hizo una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos, y afirmó que la Comisión había recibido información de un gran número de exiliados burundeses renuentes a prestar declaración por temor a represalias. En la reunión informativa, la oradora señaló también que los defensores de los derechos humanos que seguían operando en el país tenían dificultades para reunir testimonios de víctimas dentro del país por temor a exponerse tanto ellos como las víctimas al riesgo de represalias.

27. En marzo de 2017, el Subsecretario General de Derechos Humanos informó a la Comisión de Consolidación de la Paz y a los miembros del Consejo de Seguridad acerca de las denuncias de represalias contra personas que habían cooperado o tratado de cooperar con las Naciones Unidas, en particular con el ACNUDH en Buyumbura.

4. China

28. En el curso de 2016, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales recibieron varias denuncias de represalias contra personas en relación con reuniones mantenidas con la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos durante su visita a China en agosto de 2016. Los titulares de mandatos tomaron medidas al respecto y se han mantenido en contacto con el Gobierno (véase A/HRC/34/75, párr. 10, CHN 9/2016 y CHN 13/2016).

29. El 26 de abril de 2017, Dolkun Isa, un activista de derechos humanos uigur y miembro de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, que asistía al período de sesiones anual del Foro Permanente para los Derechos de los Pueblos Indígenas celebrado en la Sede de las Naciones Unidas, fue obligado a retirarse de las instalaciones a la espera de un nuevo examen, a raíz de la información transmitida por los representantes de China, alegando “razones de seguridad”. Como consecuencia de ello, el Sr. Isa no pudo reanudar su participación en el Foro.

5. Cuba

30. El 18 de octubre de 2016, algunos titulares de mandatos presentaron al Gobierno de Cuba denuncias de hostigamiento y represalias contra los defensores de los derechos humanos y los miembros del Centro de Información Legal Cubalex por su cooperación con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos (véase A/HRC/34/75, párr. 10, CUB 3/2016). Las denuncias se referían principalmente a la cooperación de los defensores con el Consejo de Derechos Humanos, sus procedimientos especiales y el mecanismo del examen periódico universal, que fueron interrogados en el aeropuerto y hostigados por oficiales de inmigración. Además, el 23 de septiembre de 2016, las oficinas de Cubalex fueron allanadas.

6. Egipto

31. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales (véase A/HRC/34/75, párr. 10, EGY 15/2016) adoptaron medidas en relación con las denuncias de represalias mediante prohibiciones de viajar contra los defensores de los derechos humanos que

trataban de participar en reuniones de derechos humanos³. Algunas de estas denuncias se referían a la participación en el 22º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la capacitación sobre la igualdad de género y los derechos de la mujer. El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos presentó denuncias de represalias contra organizaciones de la sociedad civil mediante la congelación de activos (A/HRC/34/52/Add.1, párr. 662). Funcionarios del Instituto de El Cairo para el Estudio de los Derechos Humanos y sus familiares afirman haber sido atacados por su cooperación con el mecanismo del examen periódico universal y por mantener reuniones con representantes de las Naciones Unidas.

32. El 22 de noviembre de 2016, tres titulares de mandatos expresaron su preocupación al Gobierno de Egipto respecto del proyecto de ley sobre ONG, en particular una disposición que restringía la cooperación con organizaciones extranjeras sin autorización previa (véase A/HRC/34/75, párr. 10, EGY 14/2016). Preocupaba a los expertos el hecho de que, en virtud del proyecto de ley, se impusieran serias restricciones a las organizaciones de la sociedad civil y se obstaculizara el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de asociación. En abril de 2017, el Subsecretario General de Derechos Humanos abordó las preocupaciones sobre las consecuencias de la legislación propuesta y planteó casos individuales ante el Gobierno.

33. El 3 de mayo de 2017, cuatro titulares de mandatos expresaron su preocupación por el secuestro, la detención, la tortura y los malos tratos infligidos al Dr. Ahmed Shawky Abdelsattar Mohamed Amasha, presuntamente en represalia por sus actividades como defensor de los derechos humanos. Esas actividades incluían la documentación de los casos de desaparición forzada para los procedimientos especiales (véase A/HRC/36/25, párr. 13, EGY 5/2017).

7. Eritrea

34. En su informe final al Consejo de Derechos Humanos de junio de 2016, la comisión de investigación sobre los derechos humanos en Eritrea puso de relieve su conclusión de que la protección de los testigos y las víctimas seguía siendo un importante motivo de preocupación del mandato de la comisión, y que casi todos los testigos y víctimas que hablaron con la comisión temían que las autoridades tomaran represalias, ya sea contra ellos mismos o contra sus familiares en Eritrea (A/HRC/32/47, párr. 8). En este contexto, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea reiteró en su declaración ante la Asamblea General, en octubre de 2016, su compromiso de hacer frente a las represalias contra las personas que habían cooperado con la comisión o con su mandato, y de velar por que se llevara a cabo un seguimiento adecuado por los mecanismos pertinentes. En su resolución 35/35, el Consejo de Derechos Humanos alentó a los Estados en los que residían los testigos a que protegieran a quienes habían cooperado con la comisión de investigación y con la Relatora Especial.

8. Honduras

35. El 22 de septiembre de 2015, las cuentas de correo electrónico de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, una ONG, presuntamente sufrieron un ataque informático. El 2 de marzo de 2017, Hedme Castro, coordinadora general de la Asociación, fue retenida brevemente en el aeropuerto de Tegucigalpa, cuando se disponía a abordar un vuelo a Ginebra para participar en el 34º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. La Sra. Castro fue presuntamente interrogada sobre las actividades previstas en Ginebra y las denuncias relacionadas con los derechos humanos que tenía la intención de presentar. También fue objeto de nuevos actos de intimidación, en abril y mayo, cuando los neumáticos de su automóvil fueron cortados y fue agredida durante una manifestación contra una empresa minera. Los procedimientos especiales tomaron medidas en respuesta a esas denuncias y han estado en contacto con el Gobierno al respecto. El Subsecretario General también ha examinado los casos con el Gobierno.

³ Véase también ACNUDH, “Egypt steps up travel bans on rights defenders with ‘chilling effect’, UN expert warns”, comunicado de prensa, 24 de noviembre de 2016.

9. India

36. Se recibieron denuncias sobre actos de intimidación y represalia contra Khurram Parvez a raíz de su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el mecanismo del examen periódico universal. Las represalias presuntamente consistieron en la prohibición de viajar y la detención y reclusión arbitrarias. Los procedimientos especiales adoptaron medidas en relación con esas denuncias y han estado en contacto con el Gobierno de la India a ese respecto (A/HRC/34/75, párr. 10, IND 7/2016 e IND 9/2016).

10. Irán (República Islámica del)

37. Al presentar el informe del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/34/40) en marzo de 2017, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que se habían denunciado represalias contra personas que cooperaban o establecían contacto con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En el informe se destacó que las denuncias de represalias contra esas personas seguían siendo motivo de gran preocupación; se hizo referencia en particular a un comunicado de prensa emitido por los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, en noviembre de 2016, en el que se instó al Gobierno de la República Islámica del Irán a que pusiera fin a su hostigamiento de Raheleh Rahemipor. Los titulares de mandatos se refirieron en particular al hecho de que la Sra. Rahemipor era la hermana de Hossein Rahemipor, cuyo caso era objeto de examen por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y al persistente hostigamiento de la Sra. Rahemipor, en particular los incidentes de agosto de 2016, en que fue interrogada repetidas veces por las autoridades competentes sobre la denuncia enviada al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (véase A/HRC/34/75, párr. 10, IRN 23/2016 e IRN 29/2016; y A/HRC/35/44, párr. 12, IRN 3/2017).

11. Israel

38. En su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 34º período de sesiones (A/HRC/34/70), el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 hizo hincapié en el entorno cada vez más violento para los defensores de los derechos humanos que se ocupaban de cuestiones relacionadas con el Territorio Palestino Ocupado, en particular los que trataban esas cuestiones en los foros de las Naciones Unidas. Informó de que, a raíz de una declaración formulada en octubre de 2016 ante el Consejo de Seguridad, Hagai El-Ad, Director General de Betselem – Centro israelí de información para los derechos humanos en los territorios ocupados, junto con Lara Friedman, de Americans for Peace Now, fue condenado públicamente por funcionarios israelíes de alto nivel; un miembro del Parlamento pidió que se revocara su ciudadanía. El Sr. El-Ad había advertido de la expansión de los asentamientos y el deterioro de la situación de los derechos humanos de los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado (A/HRC/34/70, párr. 47).

39. El informe mencionado se presentó tras un comunicado de prensa conjunto emitido el 16 de diciembre de 2016 por el Relator Especial y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en el que expresaron su preocupación por los activistas de los derechos humanos que trabajaban en el Territorio Palestino Ocupado que habían sido objeto de hostigamiento y amenazas cuando trataban de promover la rendición de cuentas y la colaboración con la Corte Penal Internacional⁴. Nada Kiswanson, abogada especializada en derechos humanos que trabaja en La Haya, donde representa a Al-Haq, organización que documenta las violaciones de los derechos de los palestinos en el Territorio Palestino Ocupado, independientemente de la identidad del autor, presuntamente fue objeto de amenazas de muerte y acusaciones relacionadas con su labor ante la Corte Penal Internacional (véase A/HRC/34/70, párr. 44).

⁴ ACNUDH, “Human rights defenders under growing legal pressure in the OPT – UN rights experts”, comunicado de prensa, 16 de diciembre de 2016.

12. Mauritania

40. El 11 de octubre de 2016, siete titulares de mandatos de procedimientos especiales expresaron su preocupación por las graves violaciones cometidas en Mauritania en el proceso judicial, incluidas las denuncias de tortura a raíz de la detención y reclusión arbitrarias y la condena a una pena de prisión de 13 miembros de la Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Los titulares de mandatos también expresaron su preocupación por el posible vínculo entre esos actos y los miembros que habían cooperado con el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos durante su visita al país (A/HRC/34/75, párr. 10, MRT 2/2016).

13. México

41. El 4 de agosto de 2015, el Comité contra la Tortura, en *Ramírez y otros c. México*, determinó que se habían violado los artículos 1, 2, párr. 1, 12 a 15 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (véase CAT/C/55/D/500/2012). El 19 de mayo y el 19 de septiembre de 2016, los autores afirmaron que habían sufrido actos de intimidación y acoso por parte de las autoridades a raíz de la decisión del Comité. Los actos presuntamente consistieron en una campaña de estigmatización de los autores como delincuentes y su revictimización. El Comité ha transmitido la comunicación del autor al Estado parte para que formule observaciones (véase CAT/C/59/3, párrs. 23 y 24).

14. Marruecos

42. El 3 de agosto de 2016, el Comité contra la Tortura, en *Abdul Rahman Alhaj Ali c. Marruecos*, llegó a la conclusión de que la extradición de Abdul Rahman Alhaj Ali constituiría una vulneración del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (véase CAT/C/58/D/682/2015). El autor de la queja, de nacionalidad siria registrado en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y solicitante de asilo en Marruecos, fue detenido en ese país en octubre de 2014, a raíz de una solicitud de extradición presentada por la Arabia Saudita por “abuso de confianza”, basada en relaciones comerciales anteriores en Riad. Abdul Rahman Alhaj Ali permaneció detenido a la espera de la extradición durante casi dos años, período que excedía considerablemente los 60 días de prisión preventiva previstos en Marruecos, cuando el Comité emitió la decisión. Según la información recibida por el Comité, la prolongación de su detención al parecer guardaba relación con la queja presentada al Comité en su nombre el 22 de mayo de 2015. El 10 de marzo de 2017, a la luz de la gravedad de las alegaciones del autor, los relatores en materia de represalias y seguimiento del Comité pidieron al Estado parte que, con carácter urgente, proporcionaran al Comité aclaraciones sobre la situación del autor antes del 31 de marzo de 2017.

15. Myanmar

43. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales han recibido denuncias de intimidación y represalias contra personas que han colaborado con la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar durante sus visitas al país. Se han mantenido en contacto con el Gobierno sobre la cuestión (véase A/HRC/34/75, párr 10, MMR 2/2016). Por ejemplo, se afirma que la detención y reclusión de Khine Myo Htun, un activista político y ambiental, estaba relacionada con su cooperación con la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, con quien se reunió durante su visita al país en junio de 2016, poco antes de ser detenido. El Sr. Htun, que también es un funcionario del Partido de Liberación de Arakan, había hecho una declaración por escrito en la que criticaba el impacto de las acciones militares en la población civil en el estado de Rakáin, en el conflicto en curso en la región.

44. La Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar también se refirió a la cuestión en la declaración que formuló al término de la misión

el 21 de julio de 2016 y en un comunicado de prensa el 24 de enero de 2017⁵. La Relatora reiteró que el Gobierno de Myanmar debía garantizar la seguridad de todos sus interlocutores y velar por que no fueran objeto de represalias, amenazas, acoso, castigo ni actuaciones judiciales. El Subsecretario General de Derechos Humanos examinó las denuncias con el Gobierno en junio de 2017.

45. A raíz de las denuncias de represalias contra personas que cooperaban con diversas entidades de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos puso de relieve en su resolución 34/22 sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar que nadie debía ser objeto de represalias, seguimiento, vigilancia, amenazas, acoso o intimidación por cooperar o hablar con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, con inclusión de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar y la Misión Internacional Independiente de Investigación o las Naciones Unidas, y exhortó al Gobierno de Myanmar a que adoptara medidas pertinentes para evitar tales actos y a que combatiera la impunidad investigando con prontitud y eficacia todas las denuncias de intimidación y represalias con el fin de enjuiciar a los autores y de proporcionar a las víctimas las vías de recurso adecuadas.

16. Omán

46. El 27 de junio de 2016, cinco titulares de mandatos de procedimientos especiales expresaron su preocupación por la presunta detención y reclusión arbitrarias de Said Ali Said Jadad, defensor de los derechos humanos, periodista y bloguero, por sus actividades de defensa de los derechos humanos, y los presuntos actos de represalia por su cooperación con el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación durante la visita de este a Omán en septiembre de 2014, y por la cooperación del Sr. Jadad con las organizaciones internacionales (véase A/HRC/34/75, párr. 10, OMN 1/2016). En una carta de fecha 2 de septiembre de 2016, el Gobierno de Omán respondió a las inquietudes planteadas, e informó a los titulares de mandatos que, como resultado de su recurso de apelación, el caso del Sr. Jadad se había vuelto a examinar y que este había sido puesto en libertad el 26 de agosto de 2016.

17. Pakistán

47. El 18 de abril de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Pakistán tenía previsto informar al Comité contra la Tortura durante su 60º período de sesiones, tras la presentación de un informe alternativo al Comité. La autorización solicitada por el Presidente de la Comisión para viajar a Ginebra fue denegada por considerarse que la institución nacional de derechos humanos “no tenía mandato para colaborar con el Comité de las Naciones Unidas en relación con la cuestión”. Finalmente los representantes de la Comisión pudieron participar en una reunión privada con el Comité por videoconferencia el 18 de abril de 2017. En sus observaciones finales, el Comité afirmó que estaba profundamente preocupado por el hecho de que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no había recibido la autorización que, según se informó, era necesaria en el Pakistán y que, por ese motivo, los miembros de la Comisión no habían podido viajar para participar en una reunión privada con el Comité (CAT/C/PAK/CO/1, párr. 20).

18. Rwanda

48. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales tomaron medidas en respuesta a las denuncias de intimidación y represalias contra dos defensores de los derechos humanos, Epimack Kwokwo y Robert Mugabe, por su cooperación con el examen periódico universal, el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos especiales. Las denuncias también pusieron de relieve que el Sr. Kwokwo había sido declarado *persona non grata* en Rwanda y posteriormente había sido expulsado del país, en tanto que el Sr. Mugabe había sido objeto de un intento de secuestro y de intensos interrogatorios diarios (véase A/HRC/34/75, párr. 10, RWA 1/2016 y A/HRC/35/44, párr. 12,

⁵ ACNUDH, “UN human rights expert concerned about reprisals during recent visit to Myanmar”, comunicado de prensa, 24 de enero de 2017.

RWA 1/2017). Los titulares de mandatos han estado en contacto con el Gobierno de Rwanda en relación con estos casos.

19. Arabia Saudita

49. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales adoptaron medidas en relación con el caso de Issa Al-Hamid, un defensor de los derechos humanos y miembro de la Asociación Saudita de Derechos Civiles y Políticos, que fue condenado a 11 años de cárcel, seguidos de la prohibición de viajar durante un período de 11 años y una multa de 100.000 riales. El autor fue inicialmente condenado a nueve años por el Tribunal Penal Especializado, entre otras cosas, por haberse “comunicado con organizaciones internacionales con el fin de dañar la imagen del Estado”, una acusación que, según los procedimientos especiales, también parece constituir un acto de represalia por cooperar con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos. Su pena fue incrementada en dos años el 1 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Apelaciones. Los titulares de mandatos han estado en contacto con el Gobierno de la Arabia Saudita en relación con este caso (véase A/HRC/35/44, párr 12, SAU 8/2016).

20. Sudán del Sur

50. En el informe especial sobre el examen del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) (S/2016/951), el Secretario General señaló que los oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas tenían acceso limitado a las zonas afectadas para corroborar información o entrevistar a testigos y víctimas por muchas razones, incluidas restricciones impuestas por las autoridades gubernamentales, consideraciones de seguridad del personal y un aumento de las amenazas de represalias contra testigos, víctimas y fuentes, lo que planteaba la necesidad de asegurar su protección.

51. Durante su visita a Sudán del Sur en febrero de 2017, el Subsecretario General de Derechos Humanos se reunió con diversas autoridades gubernamentales, incluidos ministros de gobierno y jefes de las fuerzas de seguridad, a quienes transmitió la necesidad absoluta de evitar represalias y amenazas contra defensores de los derechos humanos que han colaborado con las Naciones Unidas. Se refirió a casos concretos de personas que cooperaban con la UNMISS y con entidades de las Naciones Unidas en el extranjero, incluidos los casos en que las personas se vieron obligadas a abandonar Sudán del Sur debido a la intimidación y las amenazas. A este respecto, el Subsecretario General de Derechos Humanos puso de relieve un incidente específico, en septiembre de 2016, en el que los defensores de los derechos humanos fueron objeto de amenazas tras reunirse con miembros del Consejo de Seguridad durante su visita a Sudán del Sur. En julio de 2017, el Subsecretario General de Derechos Humanos también se dirigió por escrito al Gobierno de Sudán del Sur⁶ en relación con la situación de las represalias.

21. Sri Lanka

52. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos el 22 de marzo de 2017, destacó que le preocupaban las denuncias de intimidación de los miembros de la sociedad civil de Sri Lanka presentadas en el Palacio de las Naciones en Ginebra. Había remitido el caso al Subsecretario General y confiaba en que el Presidente del Consejo prestaría a esos casos la cuidadosa atención que merecían.

53. En su informe al Consejo de Derechos Humanos en su 34º período de sesiones (A/HRC/34/20), el Alto Comisionado destacó que las denuncias de que se acosaba y se vigilaba a defensores de los derechos humanos y víctimas de violaciones en Sri Lanka habían continuado, aunque en menor grado. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales también se refirieron a las denuncias de actos de represalia e intimidación contra S. Ganeshnantham y otros miembros del Pupil Salvation Forum, una

⁶ Véase también ACNUDH, “South Sudan: Senior UN human rights official condemns deplorable rights situation, calls for perpetrators to be held to account”, comunicado de prensa, 17 de febrero de 2017.

organización de la sociedad civil, en relación con su participación en el 34º período de sesiones del Consejo (véase A/HRC/36/25, párr. 13, LKA 1/2017).

22. Sudán

54. El 28 de julio de 2016, el Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán expresó su preocupación en relación con la interceptación de cuatro representantes de la sociedad civil del Sudán en el aeropuerto internacional de Jartum cuando se disponían a viajar a Ginebra para participar en las reuniones previas al examen periódico universal del Sudán (A/HRC/33/65, párr. 28).

55. El 9 de enero de 2017, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales expresaron su preocupación al Gobierno del Sudán respecto de las denuncias de represalias contra seis defensores de los derechos humanos, funcionarios y miembros del Centre for Training and Human Development, presuntamente en parte debido a su cooperación con el Consejo de Derechos Humanos (véase A/HRC/35/44, párr. 12, SDN 1/2017).

23. Tayikistán

56. El 2 de junio de 2016, el Tribunal Supremo de Tayikistán condenó a los dirigentes del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán a reclusión a perpetuidad y a penas de prisión de 2 a 28 años. El mismo día, y en respuesta directa a la condena, los familiares de los condenados que pretendían solicitar la asistencia de la Oficina de las Naciones Unidas en Tayikistán y llegar a los locales de las Naciones Unidas fueron detenidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El 7 de junio de 2016, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión dijo que había recibido informes preocupantes en el sentido de que la policía había impedido a los familiares de los miembros condenados llegar a la Oficina de las Naciones Unidas después de que se anunciara el veredicto, y se los había trasladado a un tribunal de distrito, donde se los amenazó con ser detenidos y multados por no acatar las órdenes de la policía. El Relator Especial consideró que la situación era totalmente inaceptable y agravaba el clima de temor en el país⁷.

24. Tailandia

57. En junio de 2016, Pornpen Khongkachonkiet y Somchai Homlaor defensores de los derechos humanos de la Cross-Cultural Foundation y beneficiarios de subsidios del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, y Anchana Heemmina, del Duay Jai Group, fueron objeto de una denuncia presentada por el Real Ejército Tailandés que operaba en las provincias fronterizas del sur. Las personas mencionadas habían publicado un informe en febrero de 2016 sobre los casos de tortura y malos tratos en el extremo sur de Tailandia documentados en el período 2014-2015, financiado en parte con cargo al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas. De resultas de ello, fueron acusados de publicar información falsa sobre actos de tortura y malos tratos cometidos por oficiales del ejército. El 11 de febrero de 2016, el portavoz del Real Ejército Tailandés en la región emitió una declaración pública, acusando a la organización de prejuicios y de utilizar información obsoleta para obtener financiación. Los titulares de mandatos de los procedimientos especiales transmitieron su preocupación al Gobierno de Tailandia acerca de las denuncias (véase A/HRC/34/75, párr. 11, THA 6/2016).

25. Turquía

58. El 23 de enero de 2017, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales expresaron su preocupación al Gobierno de Turquía por las denuncias de represalias contra Osman Isci, un investigador académico y defensor de los derechos humanos, que fue suspendido del cargo en la Universidad de Agri Ibrahim Cecen mediante un decreto de emergencia, por cooperar con el Relator Especial sobre la promoción y protección del

⁷ ACNUDH, “UN expert deplors harsh sentencing of Tajikistan opposition leaders and warns of radicalization”, comunicado de prensa, 7 de junio de 2016.

derecho a la libertad de opinión y de expresión durante la visita oficial del titular del mandato a Turquía en noviembre de 2016 (véase A/HRC/35/44, párr 12, TUR 1/2017). En enero de 2016, Osman Isci, junto con más de 180 investigadores académicos y universitarios, firmó un “petición de paz”, publicada por Académicos para la Paz. Desde entonces, muchos de los académicos han sido destituidos, suspendidos o forzados a dimitir, y todos siguen siendo objeto de investigaciones administrativas y judiciales (véase A/HRC/33/32, párr. 10, TUR 3/2016).

26. Turkmenistán

59. El 15 de julio de 2016, el Comité de Derechos Humanos presentó denuncias de intimidación y represalias contra Navruz Tahirovich Nasyrlyayev (CCPR/C/117/D/2219/2012), quien afirmó en una comunicación de 3 de septiembre de 2012 que el Estado parte, Turkmenistán, había violado sus derechos en virtud de los artículos 7, 14, párr. 7, y 18, párr. 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al enjuiciarlo, condenarlo y encarcelarlo varias veces por ser objetor de conciencia. El Comité observó con preocupación que, con posterioridad a la comunicación presentada por el Sr. Nasyrlyayev al respecto y, según la información proporcionada por el propio Sr. Nasyrlyayev, el 24 de enero de 2013 varios agentes de policía irrumpieron en su domicilio familiar e infligieron malos tratos a sus familiares e invitados. El Comité observó también que el Estado parte no había proporcionado ninguna información para refutar esos hechos en respuesta a la petición formulada por el Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales el 8 de febrero de 2013, de que se abstuviera de cometer actos de presión, intimidación o represalia contra el autor y sus familiares. El Comité recordó además que todo acto de presión, intimidación o represalia cometido contra una persona que hubiera presentado una comunicación o contra sus familiares constituía un incumplimiento de la obligación que incumbía al Estado parte en virtud del Protocolo Facultativo de cooperar de buena fe con el Comité en la aplicación de las disposiciones del Pacto.

27. Emiratos Árabes Unidos

60. El 27 de marzo de 2017, seis titulares de mandatos de los procedimientos especiales expresaron su preocupación al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos con respecto a las denuncias de detención, reclusión secreta y riesgo de desaparición forzada de Ahmed Mansoor, un destacado defensor de los derechos humanos y bloguero, así como actos de intimidación y represalias por su colaboración con el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales, el mecanismo del examen periódico universal y los órganos creados en virtud de tratados (véase A/HRC/36/25, párr. 13, ARE 1/2017). Varios titulares de mandatos han publicado un comunicado de prensa sobre el caso⁸.

28. Uzbekistán

61. El 1 de marzo de 2017, Elena Urlaeva, Directora de la Alianza de Defensores de los Derechos Humanos de Uzbekistán, fue presuntamente detenida en Tashkent y conducida a una comisaría de policía, al parecer el día antes de una reunión prevista con representantes de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. En la comisaría de policía, la Sra. Urlaeva fue objeto de insultos y burlas por agentes de la policía, que le dijeron que necesitaba tratamiento psiquiátrico, y luego fue trasladada por la fuerza a un centro psiquiátrico en Tashkent. El 24 de marzo, la Sra. Urlaeva fue puesta en libertad, después de 24 días de reclusión psiquiátrica. El 5 de abril, cuatro titulares de mandatos expresaron su preocupación por estos incidentes, que parecen estar relacionados con la cooperación de la Sra. Urlaeva con organizaciones internacionales (véase A/HRC/36/25, párr. 13, UZB 1/2017).

29. Venezuela (República Bolivariana de)

62. En el informe anterior del Secretario General (A/HRC/33/19), se hizo referencia a las preocupaciones expresadas por los expertos independientes en relación con denuncias

⁸ Véase ACNUDH, “UN rights experts urge UAE: ‘Immediately release human rights defender Ahmed Mansoor’”, comunicado de prensa, 28 de marzo de 2017.

de un patrón de descrédito e intimidación de los defensores de los derechos humanos en represalia por su cooperación con las Naciones Unidas y los órganos regionales en la esfera de los derechos humanos (párrs. 32 a 37). En una conferencia de prensa celebrada el 19 de mayo de 2017, un portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió al caso de Henrique Capriles, que tenía previsto reunirse con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Nueva York, el mismo día, pero se le impidió salir de la República Bolivariana de Venezuela para hacerlo. El Alto Comisionado expresó su esperanza de que el incidente no fuera una represalia vinculada con la reunión prevista. El Subsecretario General de Derechos Humanos examinó los casos de represalias con el Gobierno en abril de 2017.

30. Múltiple

63. El 21 de octubre de 2016, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, envió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativa a sus preocupaciones por el aumento del número de casos en que las autoridades estatales recurrían a la congelación de los activos bancarios de organizaciones de derechos humanos que trabajaban en favor de las víctimas de la tortura a fin de impedir la financiación externa, incluido el Fondo de Contribuciones Voluntarias. El 1 de noviembre de 2016, el Alto Comisionado expresó en su respuesta su preocupación por la información recibida sobre las represalias dirigidas contra algunos beneficiarios del Fondo, y señaló que transmitiría estas observaciones al Subsecretario General.

V. Conclusiones y recomendaciones

64. Como lo demuestra el número de denuncias que figura en el presente informe, los actos de intimidación y represalia contra quienes tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos continúan y son motivo de grave preocupación. Si bien los agentes no estatales también son responsables de los actos de represalia, la mayoría de los casos que se describen en el informe demuestran que estos actos son a menudo perpetrados por funcionarios del Estado, o al menos son tolerados por el Estado.

65. El alcance de la intimidación y las represalias también se ha intensificado en el último año, y los medios utilizados son cada vez más flagrantes. Las autoridades de varios Estados recurren a la prohibición de viajar, a menudo sin proceso judicial o sin anunciarla, para impedir que personas y grupos, en particular defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, viajen para asistir a reuniones de órganos y mecanismos de derechos humanos. Otros Estados congelan los activos bancarios de los defensores de los derechos humanos que reciben financiación de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas o que denuncian violaciones ante estos. Se ha señalado a mi atención información sobre legislación destinada a penalizar a las organizaciones por ponerse en contacto con mecanismos de derechos humanos. Como en años anteriores, las personas que colaboran con las Naciones Unidas han sido objeto, entre otras cosas, de intimidación, acoso, amenazas tanto en línea como fuera de la red, campañas de desprestigio en los medios de comunicación, la prohibición de viajar, detención y reclusión arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, inhabilitación y destitución de sus cargos, por tratar de colaborar con las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

66. Además de las graves repercusiones en la vida de las personas afectadas y sus familiares, la intimidación y las represalias socavan sistemáticamente la acción de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos y la confianza de los asociados en la Organización. También lamento que una serie de preocupaciones relativas a los actos de intimidación y represalia no haya recibido respuesta de los Gobiernos interesados durante el período objeto de examen. En otros casos, los Gobiernos respondieron a las denuncias, pero no abordaron las preocupaciones planteadas.

67. Los patrones emergentes de los casos que figuran en el presente informe y en anteriores informes parecen reflejar la estrategia de algunos Estados para impedir las actividades de los particulares con miras a proporcionar información a las Naciones Unidas en materia de derechos humanos o a cooperar con la Organización.

68. Al igual que los anteriores Secretarios Generales, quiero subrayar que todo acto de intimidación o represalia contra personas o grupos que tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, o contra sus familiares, representantes legales u otras personas con vínculos profesionales o personales con esas personas o grupos, es absolutamente inaceptable. Esos actos son contrarios a los principios mismos de las Naciones Unidas y constituyen una violación de los derechos humanos. Reitero que los Estados deben poner fin a esos actos, investigar todas las denuncias, ofrecer recursos eficaces y adoptar y aplicar medidas preventivas para impedir que se repitan.

69. Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad colectiva de adoptar medidas para responder a esos actos o prevenirlos. Esta responsabilidad es parte de nuestra obligación basada en la Carta de promover y fomentar el respeto de los derechos humanos, no solo como una obligación normativa, sino como un imperativo operacional para garantizar el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la creación de sociedades pacíficas y seguras.

70. El nombramiento del Subsecretario General de Derechos Humanos en su calidad de alto funcionario para dirigir las actividades de las Naciones Unidas en este sentido se concibió como respuesta a esta responsabilidad colectiva. Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los Estados, las entidades, órganos y mecanismos de las Naciones Unidas, los representantes de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos a que cooperen plenamente con él. Otro objetivo fundamental de esta designación es fortalecer la reunión de información sobre actos de intimidación o de represalia, alentando a todas las partes del sistema de las Naciones Unidas a compartir más sistemáticamente información sobre esos casos y a adoptar las medidas pertinentes. Insto a todos los interesados a comunicar las denuncias de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos que se produzcan para garantizar el seguimiento y la adopción de medidas.

71. El Consejo de Derechos Humanos y su Presidencia, los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Alto Comisionado son agentes importantes para hacer frente a este problema. Los exhorto a que sigan ocupándose de todos los casos de intimidación o actos de represalia que se señalen a su atención en relación con sus respectivos mandatos, y coordinando sus actividades con el alto funcionario designado, según proceda.

72. Exhorto a todos los Estados a que hagan un seguimiento de los casos incluidos en el presente informe y en informes anteriores y a que proporcionen respuestas sustantivas cuando esos casos no se hayan resuelto aún. En este contexto, recomiendo también que el Consejo de Derechos Humanos dedique tiempo suficiente al examen del presente informe y a que interactúe con el alto funcionario designado. También invito a la Presidencia del Consejo a que presente oralmente información actualizada al Consejo sobre los casos señalados a su atención en cada período de sesiones.

Anexos

[Inglés únicamente]

Annex I

Comprehensive information on alleged cases of intimidation or reprisal for cooperation with the United Nations on human rights

1. Algeria

1. On 31 March 2017, some mandate holders raised concerns with the Government over allegations of reprisals against Rafik Belamrania, founding member of Association pour les enfants des disparus forcés en Algérie – Mish'al, for publishing on Facebook on 14 February 2017 a decision made by the Human Rights Committee, regarding the summary execution of his father in 1995 (see A/HRC/36/25, para. 13, DZA 2/2017).

2. On 20 February 2017, Mr. Belamrania was summoned to and interrogated at the police station in Jijel. On 21 February 2017, he was charged with “apology of terrorism on Facebook,” under article 87 of the Penal Code and detained the following day. In its response to mandate holders dated 29 May 2017, the Government stated that on 28 November 2016 the judicial police was informed that a citizen publicly expressed his support for people accused of “apology of terrorism” and it was established that the person in question was Mr. Belamrania. The Government informed that Mr. Belamrania circulated photos and expressed his support for terrorist organizations, including Daesh. The Government further informed that Mr. Belamrania was arrested on 20 February 2017, and on 22 February 2017 he was placed under custody, and stressed that Mr. Belamrania was provided with all legal guarantees during this process. The Government’s reply did not address the allegations relating to possible reprisals.

3. On 8 March 2017, the rapporteurs designated to follow up on findings on reprisals of the Human Rights Committee sent a letter to the Government of Algeria, requesting clarifications on the situation of Mr. Belamrania. The Government responded on 18 July 2017 that the allegations of arbitrary detention of Mr. Belamrania were unfounded as he benefited from all guarantees during the process and that his custody did not go over the maximum time allowed in the penal code. The Government further stated that the arrest of Mr. Belamrania had nothing to do with the situation of his father.

2. Bahrain

4. In the light of an ongoing trend of major harassment and intimidation against human rights defenders, the imposition of travel bans on selected individuals, the arrest, detention, and ill-treatment of targeted individuals and one particular case involving sexual assault and torture as a form of reprisal, allegations were addressed by special procedure mandate holders and the President of the Human Rights Council who were in contact with the Government on these cases. The Assistant Secretary-General for Human Rights addressed allegations on cases in writing to the Government. Special procedures have expressed concerns about an orchestrated crackdown on civil society, stressing that the authorities have resorted to drastic measures to curb dissenting opinions, including reprisals for cooperating with the United Nations, and in particular OHCHR (see A/HRC/34/75, para. 10 BHR 4/2016 and BHR 7/2016).

5. Several allegations were received by special procedures about travel bans allegedly imposed on human rights defenders for their cooperation with the Human Rights Council,

in particular the defenders' participation in the thirty-second and thirty-third sessions of the Council, the twenty-second session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, or human rights workshops. On 25 November 2016, three mandate holders raised concerns about allegations of a travel ban imposed on civil society representatives Mohammed Jawad, Ms. Nedal Al-Salman, Hussain Salam Ahmed Radhi, Mohammed Al-Tajer and Enas Oun in this regard (see A/HRC/34/75, BHR 7/2016). At the time of the finalization of the present report, no response had been received from the Government.

6. On 21 June 2016, the Spokesperson of the United Nations High Commissioner for Human Rights expressed deep concern that Nabeel Rajab, a co-founder of the Bahrain Center for Human Rights, was arrested on 13 June 2016 for "spreading false news and rumours about the internal situation in a bid to discredit Bahrain". He had been subject to a travel ban since at least January 2015. There is concern on the part of the High Commissioner for Human Rights that these and subsequent actions against Mr. Rajab are connected to his engagement with the Human Rights Council.

7. On 8 July 2016, some mandate holders raised concerns regarding allegations of a travel ban imposed on members of civil society, Hussain Salam Ahmed Radhi, Ebtesam Abdulhusain Ali-alsaegh, Ebrahim Al-Demistani and Abdalnabi Al-Ekry in an act of reprisal for their cooperation with the United Nations Human Rights Council, in particular their participation in the 32nd session of the Human Rights Council, and their human rights work (see A/HRC/34/75, BHR 4/2016).

8. In its replies dated 15 August 2016 and 9 September 2016, the Government informed that the travel ban was imposed pursuant to a decision by the Public Prosecutor's Office, based on the provisions of article 159 of the Code of Criminal Procedure which authorizes the imposition of a travel ban on an accused person if it is considered that such action is in the interest of the investigation. The Government's response did not address the allegations of possible reprisals.

9. It is alleged that travel bans have been repeatedly imposed in what appears to be a politically motivated strategy to prevent human rights defenders from travelling abroad and participating in international events related to human rights, in particular those organized by the United Nations. On 23 August 2016, the President of the Council, in a meeting of the Bureau "recalled the alleged case of reprisals relating to travel bans faced by eight individuals who were allegedly prevented from traveling from Bahrain to Geneva to participate in the 32nd session of the Council, as discussed at the Bureau meetings of 23 and 29 June 2016, and informed of the lack of appropriate action or adequate explanatory information from the concerned State." The President expressed concern over this case and noted that he will consider very carefully all cases of reprisals brought to his attention.

10. On 16 June 2017, special procedure mandates publicly urged the Government to halt its orchestrated crackdown on civil society, stressing that the authorities have resorted to drastic measures to curb dissenting opinions such as torture, arbitrary detention, unfounded convictions, the stripping of citizenship, the use of travel bans, intimidation, including death threats, and reprisals for cooperating with international organizations, including the Office of the High Commissioner for Human Rights.^a

3. Burundi

11. In December 2015, the Committee against Torture requested a special report from Burundi, in light of the deterioration of the human rights situation in Burundi since April 2015. The consideration of the special report on Burundi was scheduled for the fifty-eighth session of the Committee on 28 and 29 July 2016. In this context, the Committee received reports from non-governmental organizations, in particular a coalition report from several Burundian non-governmental organizations, which was made public and posted on the Committee's webpage. Some of these NGOs also sent participants to the session held in July 2016 in Geneva, including three lawyers: Armel Niyongere (representing

^a OHCHR, "Bahrain must end worsening human rights clampdown, UN experts say," 16 June 2017.

ACAT/Campagne SOS-Torture), Dieudonné Bashirahishize (representing “Collectif des Avocats”) and Lambert Nigarura (representing ACAT Burundi/ CB-CPI).

12. A delegation from the Government of Burundi participated in the session in Geneva and briefed the Committee. During her introductory speech to the Committee on 28 July 2016, the Minister of Justice of Burundi referred to information that, in her view, had been obtained from anonymous sources that were impossible to verify, or information provided by “opposition politicians.” On the second day of the dialogue on 29 July 2016, the Government of Burundi suspended its participation and the delegation was absent. Immediately after the interruption of the dialogue, the Committee was informed of a letter from the Attorney General of Bujumbura, dated 29 July 2016, requesting that the Bujumbura Bar Association disbar four lawyers, three of whom had participated in the briefings with the Committee and were present during the first day of the dialogue (Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize and Lambert Nigarura) and one who was a signatory of the coalition report sent by the NGOs, Vital Nshimirimana.

13. On 5 August 2016, the Committee’s rapporteur on reprisals sent a letter to the Government, expressing concern that the Attorney General’s request related to the cooperation of these members of civil society with the Committee and mentioned its concerns over reprisals in its concluding observations from the session (see CAT/C/BDI/CO/2/Add.1, para. 33-34). On 11 August 2016, the Government responded to the Committee’s letter, indicating that the request of disbarment had been made in the course of legal proceedings against three of these lawyers. The lawyers concerned were charged with “participation in an insurrectional movement, attempted coup d’état, trafficking of images and, in the case of one of the lawyers, because he regularly violated the laws and regulations by his statements and pronouncements,” without giving further information.

14. On 12 August 2016, the Committee replied that the request for disbarment was preempting the outcome of an ongoing criminal case, which had not led to a finding of guilt, and requested further information. On 29 September 2016, the Bar Association of Burundi declared, while proceedings were pending before the Bujumbura Court of Appeal, that the request for disbarment by the Attorney General was unfounded. However, on 16 January 2017, the Bujumbura Court of Appeal decided to disbar Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize and Vital Nshimirimana, and to suspend Lambert Nigarura for a period of one year, although he was not under criminal investigation.

15. In a letter dated 21 February 2017, the Committee indicated that the disbarment of the lawyers before the conclusion of the pending criminal procedures against them was preempting the outcome and seemed to reinforce the hypothesis that disbarment was a measure of reprisal for the active participation of these lawyers during the Committee’s examination of the State party’s report. At the time of finalization of the present report, no further response had been received from the Government.

16. The experts conducting the independent investigation on Burundi pursuant to Human Rights Council resolution S-24/1, in their report (A/HRC/33/37) also raised concerns regarding the threat of reprisals for those individuals who cooperated or who wished to cooperate with the investigation. The experts noted that “UNIIB faced several challenges, including the fact that two of its four planned visits could not be carried out”. They further noted that “some victims and witnesses feared reprisals.” In their recommendations, they also stressed that “the Government should immediately cease its reprisals and threats against individuals who have cooperated with the investigation, and other human rights mechanisms and organizations”.

17. On 14 June 2017, the chair of the Commission of Inquiry on Burundi briefed the Human Rights Council^b and stated that the Commission received information from a large number of exiled Burundians who were afraid to provide testimonies for fear of reprisals. In the briefing, she noted that, similarly, human rights defenders who still operate in the country find it hard to gather testimony from victims inside the country for fear of exposing themselves and the victims to the risk of reprisals.

^b OHCHR, Oral briefing by Chair of Commission of Inquiry on Burundi, 14 June 2017.

18. In March 2017 the Assistant Secretary-General for Human Rights informed the Peacebuilding Commission and members of the Security Council about allegations of reprisals against persons who had cooperated or sought to cooperate with the United Nations, including with OHCHR in Bujumbura.

4. China

19. In the course of 2016, several allegations of reprisals against individuals in relation to meetings with the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights during his visit to People's Republic of China in August 2016 were received by special procedure mandate holders who took action and have been in contact with the Government (see A/HRC/34/75, para. 10 CHN 9/2016 and CHN 13/2016).

20. On 26 October 2016, some mandate holders raised concerns over the alleged arbitrary arrest and detention of Li Wenzu, as well as alleged acts of intimidation and harassment against her and Wang Qiaoling in reprisal for their cooperation with the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights during his visit in August 2016 (see A/HRC/34/75, CHN 9/2016). Ms. Li and Ms. Wang are married to two human rights lawyers, Li Heping and Wang Quanzhang, respectively. Both men were arrested on 10 July 2015 by police during the "709" incidents concerning human rights lawyers, legal assistants and law firm staff, and activists across the country, named for the date on which it took place (9 July 2015) and addressed in a prior communication by special procedure mandate holders (see CHN 6/2015).

21. On 16 August 2016, Ms. Li and Ms. Wang planned to meet with the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights at the United Nations office in Beijing. When she left home, Ms. Li noticed that three individuals, allegedly *guobao* (domestic security) officers were following her, and later physically prevented her from entering the United Nations building. As a result, Ms. Li was unable to meet with the Special Rapporteur. Since this incident, Ms. Li has reportedly been subject to various forms of surveillance and harassment by the domestic security forces. In its reply dated 19 December 2016, the Government stated that it understood that the freedom of movement of neither Ms. Li nor Ms. Wang had been restricted and that neither Ms. Li nor Ms. Wang had been subject to unlawful surveillance or harassment.

22. On 2 December 2016, some mandate holders raised their concerns regarding the disappearance of Jiang Tianyong, a prominent human rights lawyer (See A/HRC/34/75, CHN 13/2016). On 17 November 2016, Mr. Jiang travelled to Changsha, Hunan Province, to visit the wife of a human rights lawyer who had been arrested in the "709" incidents and who currently remains in detention at the Changsha Detention Centre. On 21 November, Mr. Jiang sent a message to a friend informing that he was boarding the train back to Beijing. Since this communication, he has gone missing. In their letter, the experts stated that given Mr. Jiang's meeting with the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights in Beijing in August 2016, they are also concerned that his disappearance may have occurred, at least in part, in reprisal for his cooperation with the Special Rapporteur.

23. On 28 December 2016, some mandate holders raised new information on allegations about Mr. Jiang with the Government. On 20 January 2017, the Government responded, stating that the *Gong'an* (law enforcement authority) has lawfully taken compulsory criminal measures against Mr. Jiang for fraudulently using the identification documents of others and on suspicion of illegal possession of national confidential documents and espionage. The Government's reply did not address the allegations relating to reprisals.

24. On 7 June 2017, in his statement to the Human Rights Council, the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights made a special plea to the Government to release Mr. Jiang. During the interactive dialogue with the Special Rapporteur, the Government noted that the Special Rapporteur had criticized several cases of detention of criminals which went beyond his mandate and infringed on the sovereignty of China. The Government said it would not tolerate that the protection of human rights be used to support activities that go against public order.

25. On 26 April 2017, a Uyghur human rights activist and member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization, Dolkun Isa, who was attending the annual Permanent Forum on Indigenous Peoples at United Nations Headquarters in New York, was escorted from the premises pending further examination following the receipt of information from representatives of China alleging “security reasons”. As a result, Mr. Isa could not resume his participation in the Permanent Forum on Indigenous Peoples.

5. Cuba

26. On 18 October 2016, some mandate holders raised with the Government allegations of harassment and reprisals against human rights defenders and members of the Cubalex Legal Information Center for their cooperation with the United Nations in the field of human rights (see A/HRC/34/75, para. 10 CUB 3/2016). The allegations were mainly in relation to the cooperation of the advocates with the Human Rights Council, its special procedures and the universal periodic review mechanism, who were stopped and questioned at the airport and harassed by immigration agents.

27. According to the allegations, between March and August 2016, the civil society members were stopped and questioned at the airport travelling to, or arriving back from human rights related activities. They experienced targeted harassment by immigration agents, including extensive scrutiny of travel documents, confiscation of electronic resources and documents, and interrogation about their activities. Additionally, on 23 September 2016, Cubalex Legal Information Center’s offices were raided by State authorities from four different judicial entities during a thirteen-hour operation in which the premises were searched, all electronic equipment was confiscated, and some of the staff members were subjected to body cavity searches and humiliating and degrading treatment (see CUB 3/2016).

28. On 14 December 2016, the Government responded stating that the persons mentioned do not qualify as human rights defenders under the provisions of the United Nations Declaration on human rights defenders; Cubalex receives financial support from the United States of America and carries out anti-Cuban activities; and the persons in question did not avail themselves of any existing complaint mechanisms in the country about the events described.

6. Egypt

29. Allegations of reprisals in the form of travel bans against human rights defenders attempting to participate in human rights meetings were acted upon by special procedure mandate holders (see A/HRC/34/75, para. 10 EGY 15/2016, press release of 24 November 2016^c). Some of these allegations were related to participation in the twenty-second session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change and in training on gender equality and women’s rights.

30. On 22 November 2016, some special procedure mandate holders expressed concerns with the Government about a travel ban issued against two human rights defenders, Azza Soliman and Ahmed Ragheb (see A/HRC/34/75, EGY 15/2016, press release of 24 November 2016). On 19 November 2016, and based on a judicial order issued on 17 November 2016, at the Cairo International Airport, Ms. Soliman was prevented from travelling to Jordan in order to participate in training on gender equality and women’s rights. Ms. Soliman was not formally informed of the order or of the basis for the travel ban.

31. On 15 November 2016, Mr. Ragheb was prevented by passport control officials at Cairo International Airport from travelling to Morocco in order to attend the twenty-second Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. He was informed that the travel restriction was based on a judicial order issued against him in May 2016 by an investigative judge. At the time of the finalization of the

^c OHCHR, “Egypt steps up travel bans on rights defenders with “chilling effect”, 24 November 2016.

present report, no response had been received from the Government to the concerns raised by the mandate holders.

32. Allegations of reprisals against civil society members in the form of asset freezes were raised by the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders (see A/HRC/32/52/Add.1, para. 662). Staff members of the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) and members of their families are alleged to have been targeted for their cooperation with United Nations mechanisms, and due to meetings with United Nations representatives.

33. On 22 November 2016, three mandate holders raised concerns with the Government about draft legislation on non-governmental organizations, including a provision restricting cooperation with foreign organizations without prior authorization (see A/HRC/34/75, para. 10, EGY 14/2016). The experts were concerned that the draft legislation would impose severe restrictions on civil society organizations and would impinge on the exercise of the rights to freedom of expression and freedom of association. At the time of the finalization of the present report, no response had been received from the Government. In April 2017, the Assistant Secretary-General for Human Rights addressed concerns about the implications of the proposed legislation and raised individual cases with the Government.

34. On 3 May 2017, four mandate holders expressed concerns about the abduction, detention, torture and ill-treatment of Dr. Ahmed Shawky Abdelsattar Mohamed Amasha, reportedly in retaliation for his activities as a human rights defender, which included documenting cases of enforced disappearances for special procedures (see A/HRC/36/25, para. 13, EGY 5/2017). On 10 March 2017, Dr. Amasha was allegedly abducted by police officers in Cairo. No information was given about his whereabouts until 1 April 2017. He was charged on 13 April 2017 with “belonging to a banned group” under the Anti-Terrorism Law of Egypt and transferred to the Tora prison of Cairo. It was alleged that following his abduction on 10 March 2017, he was secretly detained at the Central Police station of Abbasiya in the Cairo Governorate. Dr. Amasha was allegedly subjected to torture and ill-treatment during his secret detention. On 27 April 2017, his detention was prolonged. The mandates involved expressed serious concerns that the acts committed against Dr. Amasha seem to constitute acts of reprisals against him for documenting cases of enforced disappearances for special procedures. At the time of the finalization of the present report, no response had been received from the Government.

7. Eritrea

35. In its final report to the Human Rights Council in June 2016, the commission of inquiry on human rights in Eritrea highlighted that the protection of witnesses and victims’ continued to be a central concern during the Commission’s mandate and that “almost all victims and witnesses who spoke with the Commission feared reprisals by Eritrean authorities, either against themselves or their family members in Eritrea” (A/HRC/32/47, para. 8).

36. In this context, the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea reiterated in her statement to the General Assembly in October 2016 her commitment to address reprisals against those who had cooperated with the Commission or with her mandate and to ensure that appropriate follow-up was conducted by relevant mechanisms. In its resolution 35/35, the Human Rights Council encouraged States in which witnesses reside to protect those who have cooperated with the commission of inquiry and the Special Rapporteur from reprisals. In its statements to the Human Rights Council in June 2016 and June 2017 and in a press release about the Human Rights Council resolution in June 2016, the Government criticized the mandates and work of the above-mentioned mechanisms but did not address the allegations of reprisals.

8. Honduras

37. On 22 September 2015, the email accounts of Asociación para una Ciudadanía Participativa, a non-governmental organization, were reportedly hacked. On 2 March 2017,

Hedme Castro, the general coordinator of the association, was briefly held at Tegucigalpa airport where she was preparing to board a flight to Geneva to participate in the thirty-fourth session of the Human Rights Council. Ms. Castro was reportedly questioned about her activities scheduled in Geneva and the human rights-related complaints she intended to make. Ms. Castro was also reportedly subjected to further acts of intimidation, in April and May, when the tyres on her car were slashed and when she was assaulted during a demonstration against a mining company. Special procedures took action in response to these allegations and have been in contact with the Government. The Assistant Secretary-General has also addressed cases with the Government.

38. On 29 June 2017 the Government responded that, according to the Ministry of Internal Security, no requests for specific protection measures had been received from Ms. Castro. The prosecutor's office and the national commissioner both opened an investigation into the questioning and holding of Ms. Castro at the airport, but have not been able to contact her.

9. India

39. Allegations were received about intimidation and reprisals against Khurram Parvez in relation to his cooperation with the Human Rights Council, the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances and the universal periodic review mechanism. These reprisals allegedly took the form of a travel ban and arbitrary arrest and detention. Special procedures took action on these allegations and have been in contact with the Government in that regard (A/HRC/34/75, para. 10, IND 7/2016 and IND 9/2016).

40. On 14 September 2016, Mr. Parvez went to the Indira Gandhi International Airport in New Delhi to travel to Geneva to attend the thirty-third session of the Human Rights Council in which the Working group on Enforced or Involuntary Disappearances was presenting its report. He was also planning to hold an event on the human rights situation in Jammu and Kashmir. Mr. Parvez was reportedly stopped at the airport, held for two hours, and informed that he would not be allowed to travel. On 15 September 2016, the police took him to the Kothi Bhag police station and detained him. On 16 September 2016, two special procedure mandates expressed their concerns about allegations of arbitrary arrest, detention, intimidation and a travel ban issued against Mr. Parvez in alleged reprisal for cooperating with human rights mechanisms, in particular, concerning the documentation and litigation of human rights violations in Jammu and Kashmir and the submission of communications and urgent appeals to the special procedures on behalf of victims of human rights violations as well as the recent submission provided by his organization to the United Nations for the upcoming universal periodic review (A/HRC/34/75, IND 7/2016).

41. In its response dated 29 September 2016, the Government disputed that Mr. Parvez was a human rights defender, and stated that he has been working against the interests of the state of Jammu and Kashmir, has been involved in anti-India activities and has incited youth to violence. The Government further stated that Mr. Parvez had been in touch with secessionist leaders and has incited individuals to violent protests in the aftermath of the July 2016 unrest.

42. In a letter dated 11 October 2016, mandate holders reiterated their continuing preoccupations and expressed concern at the very broad and vague nature of the accusations contained in the Government's reply (A/HRC/34/75, IND 9/2016). They were also concerned at the implication that Mr. Parvez was not a human rights defender or that he would pretend to be one, despite his longstanding and positive engagement with the United Nations human rights mechanisms. At the time of the finalization of the present report, no further response had been received from the Government.

10. Iran (Islamic Republic of)

43. In presenting the report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran (A/HRC/34/40), the Deputy United Nations High Commissioner for Human Rights stressed that reprisals against individuals cooperating or

having established contact with United Nations human rights mechanisms had been reported. In the report, it was stressed that allegations of reprisals remained a cause of great concern and referred in particular to a press statement issued by special procedure mandate holders in November 2016 in which they urged the Government to end its harassment of Raheleh Rahemipor. The mandate holders referred in particular to the fact that Ms. Rahemipor was the sister of Hossein Rahemipor, whose case was under review by the Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances and to the continued harassment of Ms. Rahemipor, including the incidents during which she was questioned repeatedly in August 2016 by the relevant authorities about the complaint sent to the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (see A/HRC/34/75, para. 10, IRN 23/2016 and IRN 29/2016; and A/HRC/35/44, para. 12, IRN 3/2017).

44. In June 2016, the Working Group had reviewed the case of the alleged enforced disappearance of Mr. Rahemipor and transmitted it to the Government. It was reported that following the transmission of the case of Mr. Rahemipor to the Government by the Working Group, Ms. Rahemipor was contacted several times by phone at which time she was instructed to turn herself in. She was charged with a range of national security offences, including “propaganda against the regime,” “participation in unlawful assemblies,” and “membership of Rah-e Kargar.” At the time of the finalization of the present report, no response had been received from the Government to any of the three communications.

11. Israel

45. In his report submitted to the Human Rights Council at its thirty-fourth session (A/HRC/34/70), the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 highlighted an increasingly virulent environment for human rights defenders working on issues related to the Occupied Palestinian Territory, including those addressing issues in United Nations forums. He reported that following a statement made in October 2016 to the Security Council, the Director-General of B’Tselem, Hagai El-Ad, together with Lara Friedman of Americans for Peace Now, was publicly condemned by high-level Israeli officials. One Member of Parliament called for the revocation of his citizenship. Mr. El-Ad had warned of the expansion of settlements and the deteriorating situation of human rights for Palestinians.

46. The above-mentioned report followed a joint press statement issued on 16 December 2016 by the Special Rapporteur and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, in which they expressed their concern for human rights activists working in the Occupied Palestinian Territory who had been subject to “harassment and threats while seeking to promote accountability and engage with the International Criminal Court.”^d Nada Kiswanson, a human rights lawyer in The Hague, where she represents Al-Haq, an organization that documents violations of Palestinians’ rights in the Occupied Palestinian Territory regardless of the identity of the perpetrator, is alleged to have been subjected to death threats and accusations linked to her work before the International Criminal Court (see A/HRC/34/70, para 44).

12. Mauritania

47. On 11 October 2016, seven special procedure mandate holders expressed their concern about grave violations in Mauritania of the judicial process, including allegations of torture, following the arrest, arbitrary detention and sentencing to prison of 13 members of Initiative pour la résurgence de la mouvement abolitionniste (IRA). The mandate holders also expressed their concern about the possible link between those acts and the members having cooperated with the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights during his visit to the country in May 2016 (A/HRC/34/75, para. 10, MRT 2/2016).

^d OHCHR, “Human rights defenders under growing legal pressure in the OPT,” 16 December 2016.

48. The members of IRA were arrested between June and July 2016, and were accused of armed gathering, use of violence towards law enforcement agents, insurrection and membership in a non-recognized organization. Following trials, which violated fair trial and due process guarantees due to a number of irregularities, the activists were sentenced in August 2016 to imprisonment, ranging from three to fifteen years. The communication sent to the Government expressed concern that the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights indicated that the authorities had possibly targeted IRA activists as reprisal for their cooperation with the visit of the Special Rapporteur. Another communication sent by mandate holders on 19 October 2016 further addressed the situation of IRA members, recalling that the Special Rapporteur had met IRA members during his visit. In a letter dated 19 October 2016, the Government responded by denying allegations of torture, and stating that the judicial process scrupulously respected international human rights standards. The Government's reply did not address the allegations of reprisals.

13. Mexico

49. On 4 August 2015, the Committee against Torture, in *Ramirez et al. v. Mexico*, found a violation of articles 1, 2 (1), 12-15 and 22 of the Convention against Torture and Other Cruel or Degrading Treatment or Punishment (see CAT/C/55/D/500/2012 and communication No. 500/2012). On 19 May and 19 September 2016, the complainants submitted that they had suffered acts of intimidation and harassment by the authorities as a result of the Committee's decision.

50. The complainants noted that the State party had undertaken a campaign aimed at stigmatizing them as criminals and re-victimising them. According to reports, a few days after the release of the Committee's decision, the Delegate of the Attorney General's Office for the Baja California province declared before the media that torture allegations were a "common strategy used by lawyers defending criminals in order to obtain their release or suspend the proceedings against them". According to information received, several printed media published articles referring to the complainants as "kidnappers released by the United Nations." Television programs stigmatized the NGO that represented the complainants before the Committee, stating that the Committee had enabled an organised criminal network supporting kidnappers.

51. Despite having been acquitted in the criminal case against them, two of the complainants were detained again a few hours after having been released based on an alleged arrest warrant dating from 2009 and without a judicial decision. As at 31 July 2017 they were being held in the punishment cells of a penitentiary centre together with convicted detainees, and have been subjected to ill-treatment. Following the release of the other two complainants, the two complainants who remained in detention have been repeatedly harassed by the police, subjected to random arrests and interrogations and called "kidnappers". Their family members have also been harassed by the police. One of the complainants has had his workplace searched on several occasions and without a warrant.

52. In September 2016, the complainants' submission was transmitted to the State party for observations. The rapporteurs on reprisals and on follow-up requested that the State party adopt all measures necessary to protect the security and integrity of the complainants, their family members and representatives, and inform the Committee accordingly. No response was received from the Government, and the Committee sent a reminder at its 59th session (see CAT/C/59/3).

14. Morocco

53. On 3 August 2016, the Committee against Torture, in *Abdul Rahman Alhaj Ali v. Morocco*, found a that the extradition of Abdul Rahman Alhaj Ali would constitute a breach of article 3 of the Convention against Torture and Other Cruel or Degrading Treatment or Punishment (see CAT C/58/D/682/2015 and communication No. 682/2015). Mr. Abdul Rahman Alhaj Ali, a Syrian national registered with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and seeking asylum in Morocco, was detained in

October 2014 in Morocco on an extradition request by Saudi Arabia for “breach of trust” based on previous business relations in Riyadh. The Committee urged the Government to release him or to try him if charges are brought against him in Morocco, as he had been in extradition detention for almost two years, far in excess of the 60-day pretrial period provided for in Morocco. According to information received by the Committee, the prolongation of his detention was reportedly related to the complaint made to the Committee on his behalf on 22 May 2015. On 10 March 2017, in the light of the gravity of the complainant’s allegations, the Committee’s rapporteurs on reprisals and follow-up requested the State party urgently to provide the Committee with the necessary clarifications on the situation of the complainant by 31 March 2017.

54. On 8 March 2017, Mr. Abdul Rahman Alhaj Ali informed the Committee that, while he was on a hunger-strike to protest against his detention for almost three years, he was advised by officials that he was not going to be released from detention in Morocco, and that he should rather accept to be extradited to Saudi Arabia. He therefore signed an extradition agreement under duress, which he subsequently requested to withdraw. On 10 March 2017, the Committee’s rapporteurs on reprisals and follow-up requested the Government to urgently provide the necessary clarifications on the situation of Mr. Abdul Rahman Alhaj Ali. In the absence of a response, the Chairperson of the Committee met with the Government on 11 May 2017. On 22 May 2017, the Government responded that the complainant is being regularly visited, due to the absence of his family in Morocco, by NGOs and the delegation of UNHCR, that his rights as a detainee have been respected, and that he had ended his hunger strike. The Government further informed that the judicial authority has accepted that Mr. Ali had withdrawn his request for extradition allegedly signed under threat. Mr. Abdul Rahman Alhaj Ali still remains in detention.

15. Myanmar

55. Special procedure mandate holders received allegations of intimidation and reprisals against individuals who have engaged with the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar during her visits to the country. They have been in contact with the Government on the matter (see A/HRC/34/75, para. 10, MMR 2/2016). For example, it is alleged that the arrest and detention of Khine Myo Htun, a political and environmental activist, is linked to his cooperation with the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, with whom he met during her visit in June 2016, shortly before he was detained. Mr. Htun, an official of the Arakan Liberation Party, had issued a written statement criticizing the impact of State military action on civilians in Rakhine State in the ongoing conflict in that region.

56. Khine Myo Htun reportedly submitted to the authorities evidence substantiating his allegations. On 5 May 2016 charges were filed against him for defamation and incitement under the Myanmar Penal Code. On 22 June 2016, he met with the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar during her visit to the country. On 26 August 2016, four mandate holders raised concerns regarding the alleged arbitrary detention and criminal prosecution of Mr. Htun (see A/HRC/34/75, MMR 2/2016), also expressing concern that the arrest and detention of Mr. Htun may carry an element of reprisal for his cooperation with the United Nations on human rights, as these actions took place after he had met with the Special Rapporteur.

57. On 6 October 2016, the Government responded to the allegations of reprisals against Mr. Htun, stating that on 5 May 2016 a case was filed against him for publishing a statement with the intent to mislead the public, defame the Tatmyadaw, or Myanmar Armed Forces, and intimidate the public by using false information. In its reply the Government did not address the allegations relating to reprisals.

58. On 24 January 2017, the Special Rapporteur issued a press release,^e expressing her deep concerns about reported reprisals against some of those with whom she met. She drew

^e OHCHR, “UN human rights expert concerned about reprisals during recent visit to Myanmar,” 24 January 2017.

attention to her alarm that security forces, after a brief lull in activity, had resumed military counter operations in villages nearby to those she had visited in June 2016, with allegations of arbitrary detention and arrest in relation to these raids. The Special Rapporteur further addressed acts of intimidation and reprisals related to her visit in her end of mission statement of 21 July 2016.^f She renewed her request to all civil society actors, media workers and prisoners with whom she met to report to her any cases of reprisals. She also reiterated that the Government must ensure the safety of all her interlocutors and guarantee that they will not face any reprisals, including threats, harassment, punishment or judicial proceedings. The Assistant Secretary-General for Human Rights addressed the allegations with the Government in June 2017.

59. In its resolution 34/22, the Human Rights Council emphasized that no one should face reprisals, monitoring, surveillance, threats, harassment or intimidation for cooperating or speaking with special procedures, including the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, the international independent fact-finding mission or the United Nations, and called upon the Government to take appropriate measures to prevent such acts and to combat impunity by investigating promptly and effectively all allegations of intimidation and reprisal in order to bring perpetrators to justice and to provide victims with appropriate remedies.

16. Oman

60. On 27 June 2016, five special procedure mandate holders expressed concerns about the alleged arbitrary arrest and detention of Said Ali Said Jadad, a human rights defender, journalist and blogger, for his human rights activities and the alleged continued reprisals for his cooperation with the Special Rapporteur on the right to freedom of peaceful assembly and of association during his visit to Oman in September 2014, as well as for his cooperation with international organizations (see A/HRC/34/75, para. 10, OMN 1/2016).

61. On 21 January 2015, Mr. Jadad was arrested in Salalah, reportedly in response to his critical writing. He was convicted on 8 March 2015, for “undermining the prestige of the State,” for “inciting the public to join an illegal gathering” and for “publicizing material that disturbs the public order.” He was released in April 2015, pending appeal, rearrested again on 18 November 2015, and later released. In a letter dated 2 September 2016, the Government of Oman responded to the concerns raised and informed the mandate holders that as a result of their appeal, Mr. Jadad’s case had been re-examined and that he had been released from detention on 26 August 2016.

17. Pakistan

62. On 18 April 2017, the National Commission for Human Rights of Pakistan was due to brief the Committee against Torture during its sixtieth session, following the submission of an alternative report to the Committee. The request made by the Commission Chair for permission to travel to Geneva was denied on the basis that the national human rights institution was “not mandated to interact with the Committee on the present issue.” Representatives of the Commission were eventually able to participate in a private meeting with the Committee via video link on 18 April 2017.

63. The Committee noted in its concluding observations its serious concern that the Chair of the Commission had not received authorization, which was reportedly required in Pakistan for the National Commission for Human Rights to be able to travel to participate in a private meeting with the Committee (CAT/C/PAK/CO/1, para. 20). The Committee recommended that “the State party should take immediate measures to ensure that the National Commission for Human Rights is able to carry out its mandate fully and in an effective and independent manner, and in full conformity with the Principles relating to the status of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (Paris

^f OHCHR, End of mission statement of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, 21 July 2017.

Principles) (...) including allowing the Commission to meet in person with international human rights mechanisms abroad (ibid. para. 21).

18. Rwanda

64. Special procedure mandate holders took action in response to allegations of intimidation and reprisals against human rights defenders, Epimack Kwokwo and Robert Mugabe for their cooperation with the universal periodic review, the Human Rights Council and special procedures. These allegations also drew attention to the declaration that Mr. Kwokwo was *persona non grata* in Rwanda and his subsequent expulsion from the country, and the kidnapping and intense daily interrogation of Mr. Mugabe (see A/HRC/34/75, para. 10, RWA 1/2016 and A/HRC/35/44, para. 12, RWA 1/2017). The mandate holders have been in contact with the Government on these cases.

65. Between September 2014 and March 2015, Epimack Kwokwo, a human rights defender from the Democratic Republic of the Congo and the Executive Secretary of the League for the Defense of Human Rights in the Great Lakes region, coordinated the work of various civil society organizations reporting on the situation of human rights in Rwanda for a submission to the universal periodic review of the country scheduled for November 2015. According to allegations received, on 12 October 2015 Mr. Kwokwo was stopped and detained by immigration officers for seven hours on the border between Goma, Democratic Republic of the Congo and Rwanda as he was coming back from a mission in the Democratic Republic of the Congo. He was interrogated on his work on human rights and the reports produced by the League. His passport was confiscated by immigration authorities. He was also told that he had contributed to “frame Rwanda in a bad light” given his contribution to the submission to the universal periodic review. Between January and March 2016 he was stopped by immigration services five times and asked about his work and his residence in Rwanda. In May 2016, Mr. Kwokwo was interviewed twice at the immigration office in Kigali. He was informed that he was declared *persona non grata* in Rwanda and would be expelled from the country.

66. On 5 July 2016, mandate holders raised concerns with the Government (see A/HRC/34/75, RWA 1/2016). On 22 September 2016, the Government responded that Mr. Kwokwo had been expelled as a result of his repeated violations of and disregard for the immigration laws of Rwanda, and that the expulsion had nothing to do with his human rights work as alleged.

67. On 18 January 2017, mandate holders raised concerns regarding acts of intimidation and reprisals, including attempted kidnapping and intense daily interrogation, allegedly committed against Robert Mugabe, a journalist and human rights defender, following his cooperation with United Nations human rights mechanisms (see A/HRC/35/44, RWA 1/2017). In November 2015, Mr. Mugabe submitted a report to the universal periodic review on Rwanda. In September 2016, he attended the thirty-third session of the Human Rights Council and held meetings with OHCHR. In October 2016, once back in Rwanda, he was subject to intimidation and harassment by plain-clothed armed men on a number of occasions, including attempted kidnapping. When he filed a complaint for the attempted kidnapping, the police instead opened an investigation against him on charges of treason and spreading rumours with the intent to undermine the Government. On 23 December 2016 the police reportedly started daily intense interrogations of Mr. Mugabe. At the time of the finalization of the report, no response had been received from the Government.

19. Saudi Arabia

68. Special procedure mandate holders took action on the case of Issa Al-Hamid, a human rights defender and member of the Saudi Civil and Political Rights Association, who was sentenced to 11 years in prison followed by an 11-year travel ban and fine of 100,000 Riyals. He was originally sentenced to nine years by the Specialized Criminal Court for, *inter alia*, having “communicated with international organizations in order to harm the image of the State”, a charge that according to special procedures appear to also

constitute an act of reprisal for cooperating with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights. His sentence was increased by two years on 1 December 2016 by the Court of Appeal.

69. On 13 December 2016, several mandate holders raised concerns over allegations of reprisals against Mr. Al-Hamid for cooperating with the United Nations on human rights (see A/HRC/35/44, para. 12, SAU 8/2016). In its reply dated 13 February 2017, the Government did not address the case of Mr. Al-Hamid, as a response concerning his case had been provided already in relation to a previous communication (SAU 4/2016) in which the Government informed that he was sentenced by a lower court to nine years of imprisonment and a ban to travel outside the Kingdom for a similar period. He was being charged for: his involvement in the establishment of an unlicensed association; non-compliance with the court order to dissolve it; stirring up public opinion; explicitly defaming the faith and loyalty of the members of the Council of Senior Scholars; disparaging the judiciary; and committing offences that undermine national security. The Government did not address the allegations relating to reprisals in either of its responses.

20. South Sudan

70. In the special report of the Secretary-General on the review of the mandate of the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) (S/2016/951), the Secretary-General stressed that United Nations human rights officers face limited access to affected areas to corroborate information or interview witnesses and victims for many reasons, including restrictions imposed by government authorities, security considerations for staff members and increasing threats of reprisal against witnesses, victims and sources, which raised the need to ensure their protection.

71. During his visit to South Sudan in February 2017,⁸ the Assistant Secretary-General for Human Rights met with a number of Government authorities, including cabinet ministers and heads of security forces, to whom he stressed the absolute need to avoid reprisals and threats against human rights defenders who have cooperated with the United Nations. He addressed specific cases of individuals cooperating with UNMISS and with United Nations entities abroad, including those cases in which individuals were forced to leave South Sudan due to intimidation and threats. In this connection, he drew attention to a specific incident in September 2016 in which human rights defenders were threatened following their meeting with members of the Security Council during their visit to South Sudan. He further addressed the situation of reprisals to the Government in writing in July 2017.

21. Sri Lanka

72. The United Nations High Commissioner for Human Rights, in his address to the Human Rights Council on 22 March 2017, stressed that he was disturbed to hear reports of intimidation of members of Sri Lankan civil society in the Palais des Nations in Geneva. He referred the case to the Assistant Secretary-General. He also stated that he trusted that the President of the Council will give these cases close attention. In his report to the Human Rights Council (A/HRC/34/20), the High Commissioner stressed that reports of harassment or surveillance of human rights defenders and victims of violations had continued in Sri Lanka, albeit to a lesser degree. In its response at the Human Rights Council on 22 March 2017, Sri Lanka stated that it remained firm in its resolve to enhance the fundamental rights of all citizens as equals in a free and democratic country, where fear and intimidation have no place.

73. Special procedure mandate holders have also addressed the allegations of reprisals and intimidation against S. Ganeshnantham and other members of the civil society

⁸ OHCHR, "South Sudan: Senior UN human rights official condemns deplorable rights situation, calls for perpetrators to be held to account," 17 February 2017.

organization Pupil Salvation Forum relating to their participation in the thirty-fourth session of the Human Rights Council in Geneva (see A/HRC/36/25, LKA 1/2017).

74. On 7 and 9 March 2017, Mr. Ganeshnantham addressed the Human Rights Council and referred to the current human rights situation in Sri Lanka. On 11 March 2017, officers from the Criminal Investigation Department attached to the Kalmunai Police station, in Sri Lanka, arrived at Mr. Ganeshnantham's house in Kalmunai, and threatened his relatives. The experts expressed serious concerns at the alleged threats and intimidation which appear to be linked to Mr. Ganeshnantham's participation in the thirty-fourth session of the Human Rights Council. At the time of the finalization of the present report, no response had been received from the Government.

22. Sudan

75. On 28 July 2016, the Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan expressed his concerns regarding the interception of four representatives of Sudanese civil society at Khartoum International Airport on their way to Geneva, where they were to participate in pre-session meetings of the universal periodic review on the Sudan (see A/HRC/33/65, para. 28). Sawsan Hassan Elshowaya, Dr. Muawia Shaddad, Faisal Mohamed Salih and Siddig Yousif were stopped and informed of travel bans in place against them. Their passports were confiscated and they were told to report to the Information and Inquiry Section at National Intelligence and Security Service headquarters for further information.

76. On 9 January 2017, special procedure mandate holders expressed concerns with the Government with regard to allegations of reprisals against six human rights defenders, staff members and affiliates of the Centre for Training and Human Development reportedly in part because of their cooperation with the Human Rights Council (see A/HRC/35/44, para. 12, SDN 1/2017).

77. On 22 May 2016, these individuals were arrested by National Intelligence and Security Service agents, with three of them subsequently released on bail. On 15 August 2016, criminal case no. 110/2016 was filed against all of them, who were reportedly charged by the Prosecution Office under the 1991 Penal Code, pertaining to articles 21 (joint acts in execution of criminal conspiracy), 50 (undermining the constitutional system), 51 (waging war against the State), 53 (espionage against the country), and 65 (criminal and terrorist organizations). These charges, if confirmed, could lead to the application of the death penalty. The criminal charges brought against these six human rights defenders, and the ongoing arbitrary detention of three of them, are reportedly in part related to their cooperation with the Human Rights Council. At the time of the finalization of the report, no response had been received from the Government.

23. Tajikistan

78. On 2 June 2016, the Supreme Court of Tajikistan sentenced leaders of the banned Islamic Revival Party of Tajikistan (IRPT) to life imprisonment and eleven other members to jail terms ranging from two to 28 years. The IRPT members were reportedly sentenced based on accusations of participation in a criminal group, incitement of national, racial or religious hatred, murder, terrorism, appeals to violent change of the constitutional order, illegal possession or transfer of weapons, and armed rebellion, but the trial was closed and allegedly did not adhere to international human rights standards. On the same day, and in direct response to the conviction, relatives of the convicted IRPT members intended to seek assistance from the United Nations Office in Tajikistan but were intercepted by law enforcement officials who detained all of the individuals who were attempting to reach the United Nations premises.

79. On 7 June 2016, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression stated in a press release endorsed by multiple mandate holders that he deplored the harsh sentencing of Tajikistan political opposition leaders. He further noted that he had received disturbing reports that relatives of IRPT

members were prevented by the police from reaching the United Nations office after the verdict was announced, and had been taken to a district court where they were threatened to be arrested and fined for not obeying the police. The Special Rapporteur found the situation to be totally unacceptable, and that it furthered the climate of fear in the country.”^h

24. Thailand

80. In June 2016, grant recipients of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture, human rights defenders Porpen Khongkachonkiet and Somchai Homla-or of Cross-Cultural Foundation and Anchana Heemmina of Duay Jai Group, were the object of a legal complaint filed by the Royal Thai Army operating in the Southern Border Provinces. The above-mentioned persons had published a report in February 2016 entitled “Fifty-four cases of torture and ill-treatment in the Deep South documented in 2014-2015” funded in part by the United Nations Voluntary Fund. They were consequently accused of publishing false information on torture and ill-treatment committed by military officials. The spokesperson of the Royal Thai Army in the region issued a public statement on 11 February 2016 accusing the organization of bias and of using outdated information to seek funding.

81. On 4 August 2016, some mandate holders expressed concern over criminal defamation charges filed against these human rights defenders in relation to their human rights work on documenting cases of torture and ill-treatment in Thailand (see A/HRC/34/75, para. 11, THA 6/2016). On 5 August 2016, the Government replied that the allegations of torture documented in the report were unfounded. It further stated that the complaint against the three human rights defenders is still under investigation by the police, before it is sent to the prosecutor’s office to decide whether to file the case for further court proceedings.

25. Turkey

82. On 23 January 2017, special procedure mandate holders raised concerns with the Government at allegations of reprisals against Osman Isci, an academic researcher and human rights defender, who was suspended from his research position at Agri Ibrahim Cecen University by emergency decree, for his cooperation with the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression during his official visit to Turkey in November 2016 (see A/HRC/35/44, para. 12, TUR 1/2017). In January 2016, Osman Isci, together with more than 180 other academic and university researchers signed the “Peace Petition”, which was published by Academics for Peace. Many of these academics have since been dismissed, suspended or forced to resign, and all of them continue to be subjected to administrative and judicial investigations (see A/HRC/33/32, para. 10, TUR 3/2016).

83. On 15 December 2016, approximately one month after he participated in a meeting with the Special Rapporteur, Mr. Isci received a document notifying him that, according to Emergency Decree nos. 667, 668 and 675, and Articles 137 and 138 of the Law on Public Officers, he had been placed under administrative investigation and suspended until its completion. In its reply of 11 April 2017, the Government responded that a disciplinary investigation was initiated against Mr. Isci on suspicion that he might be linked to the Kurdistan Worker’s Party (PKK), a suspected terrorist organization. The Government further submitted that under Decree Law 667, public officials who are deemed to be members or have links to terrorist organizations be dismissed from public service. The Government stated that the investigation against Mr. Isci is ongoing, and it has no relevance to his meeting with the Special Rapporteur, nor to his assumed work as a human rights defender.

^h OHCHR, “UN expert deplors harsh sentencing of Tajikistan opposition leaders and warns of radicalization,” 7 June 2016.

26. Turkmenistan

84. In its views adopted on 15 July 2016, the Human Rights Committee raised allegations of intimidation and reprisals concerning Navruz Tahirovich Nasyrlyayev who claimed in a submission of 3 September 2012 that the State party had violated his rights under articles 7, 14(7) and 18(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights through his repeated prosecution, conviction and imprisonment as a conscientious objector (see CCPR/C/117/D/2219/2012). The Committee noted with concern that, subsequent to Mr. Nasyrlyayev's submission of a communication to the Committee, according to information provided by Mr. Nasyrlyayev himself, on 24 January 2013 his family home was raided by police officers and that family members and guests had been subjected to mistreatment.

85. The Committee also noted that the State party had not provided any information to the contrary following the call by the Rapporteur on new communications and interim measures, dated 8 February 2013, to abstain from acts of pressure, intimidation or reprisal against Mr. Nasyrlyayev and his relatives. The Committee also recalled that any act of pressure, intimidation or reprisal against a person who has submitted a communication or his or her relatives constitutes a breach of the State party's obligations under the Optional Protocol to cooperate with the Committee in good faith in the implementation of the provisions of the Covenant.

27. United Arab Emirates

86. On 27 March 2017, six special procedure mandate holders expressed their concerns with the Government at allegations of arrest, secret detention and risk of enforced disappearance of Ahmed Mansoor, a prominent human rights defender and blogger, as an act of intimidation and reprisal for his collaboration with the Human Rights Council, the special procedures, the universal periodic review mechanism and treaty bodies (see A/HRC/36/25, para. 13, ARE 1/2017). On 20 March 2017, security agents searched the home of Mr. Mansoor, confiscated laptops and other equipment; they arrested Mr. Mansoor, and took him to an unknown location. The reasons behind his arrest, the alleged charges against him, and his place of detention remained unknown at that time. On 28 March 2017, three mandate holders issued a press release, stating their fear that his arrest and secret detention may constitute an act of reprisal for his engagement with United Nations human rights mechanisms.ⁱ

87. On 25 April 2017, the Government responded that the Office of the Public Prosecutor concerning cybercrime arrested Mr. Mansoor on 20 March 2017 on the charge of circulating false and misleading information on the Internet with a view to spreading hatred and sectarianism. He was informed of the charges and placed in pretrial detention in Abu Dhabi Central Prison. He was allowed to appoint a lawyer and his family was allowed to visit him, in accordance with the procedures applicable to detention facilities. The Government concluded that allegations concerning arbitrary detention, lack of information concerning the place of detention and lack of specifying charges against him are false. The Government's response did not address the allegations concerning intimidation and reprisals. Mr. Mansoor reportedly remains in solitary confinement, while the place of detention remains unverified.

28. Uzbekistan

88. On 1 March 2017, Elena Urlaeva, head of the Human Rights Defenders Alliance of Uzbekistan, was allegedly arrested in Tashkent and taken to a police station, reportedly the day before her planned meeting with representatives of the International Labour Organization and the World Bank. At the police station, Ms. Urlaeva was insulted and mocked by police officers who told her that she needed psychiatric treatment, and was then

ⁱ OHCHR, "UN Rights Experts Urge UAE: Immediately release human rights defender Ahmed Mansoor," 28 March 2017.

forcibly transferred to a psychiatric facility in Tashkent. On 24 March, Ms. Urlaeva was released after 24 days of psychiatric detention.

89. On 5 April 2017, four mandate holders expressed their concerns regarding these incidents, which appear to be related to her cooperation with international organizations (see A/HRC/36/25, para. 13, UZB 1/2017). On 28 April 2017, the Government responded that, according to a 2006 ruling of the Miabad Interregional Civil Court in Tashkent, Ms. Urlaeva suffers from mental illness and is legally incompetent. The Government did not address the allegations of intimidation and reprisals in its response.

29. Venezuela (Bolivarian Republic of)

90. In the previous report of the Secretary-General, reference was made to the concerns expressed by independent experts with regard to the pattern of discrediting and intimidating human rights defenders in reprisal for their cooperation with the United Nations and regional bodies on human rights (A/HRC/33/19, paras.32-37). Similar allegations were received in the past. In a press briefing held on 19 May 2017, the spokesperson of the United Nations High Commissioner for Human Rights referred to the case of Henrique Capriles, who was scheduled to meet the High Commissioner in New York on the same day but was prevented from leaving the Bolivarian Republic of Venezuela to do so. The High Commissioner expressed his hope that the incident was not a reprisal linked to the planned meeting with him in New York. The Assistant Secretary-General for Human Rights addressed cases of reprisals with the Government in April 2017.

30. Multiple

91. On 21 October 2016, the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture addressed a letter to the United Nations High Commissioner for Human Rights with regard to concerns about the increasing number of instances in which State authorities resort to freezing the banking assets of human rights organizations working for victims of torture, in order to impede external funding, including from the Voluntary Fund. On 1 November 2016, the High Commissioner in his response expressed concern about the feedback provided on situations of reprisals against a number of the Fund's grantees, and stated that he would share these observations with the Assistant Secretary-General.

Annex II

Information on alleged cases included in the previous report

1. Honduras

1. The Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, in her report following her mission to Honduras in November 2015, referred to the plight of indigenous leaders working on land issues, including the case of Berta Cáceres (see A/HRC/33/42/Add.2, paras. 21 and 22). She stressed that the murder of indigenous leaders who defend their lands, including a large number of leaders of the Tolupán, Garífuna, Lenca, Chortí and Pech peoples, give rise to the most complaints to the Office of the Special Prosecutor for Ethnic Groups and Cultural Heritage, in addition to cases of assault, attempted homicide and violence against indigenous women.

2. The murder of Ms. Cáceres, an influential member of the Lenca community who headed protests against hydroelectric projects in the Lenca region, drew the attention of the world to this problem. She further stated that “it is a matter of enormous concern that many of the indigenous leaders that have been killed, such as Ms. Cáceres, had been granted protective measures by the Inter-American Commission on Human Rights, with a view to protecting their lives and ensuring their personal safety. The murders have occurred despite a law on the protection of human rights defenders adopted in April 2015, which establishes mechanisms to provide an institutional response to requests for protection for human rights defenders, including early warning measures at times of particular danger. Moreover, given the strong presence of the army and the military police in the country, evidence received about collusion by the police and the armed forces with private or business interests, including organized crime groups in indigenous territories, is worrying. All this exacerbates the violence and impunity suffered by the indigenous peoples (ibid., para 21).”

3. During the thirty-third session of the Human Rights Council in September 2016, the mandate holder referred again to the plight of indigenous leaders defending their land rights and the implications of Ms. Cáceres’s death on the situation of indigenous rights defenders in the country, who are facing deaths, threats and violence in relation to their work. The Special Rapporteur on the situation of human rights defenders also referred to the death of Ms. Cáceres in a press release on 6 October 2016^a and in his statement to the 34th session of the Human Rights Council.

2. Iraq

4. The cases of Imad Amara and Faisal Al-Tamimi were included in the report on cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights (see A/HRC/33/19, para. 24). The Special Rapporteur on the situation of human rights defenders also expressed concern about the allegations of arrest and ill-treatment of both cases in his observations on communications report (see A/HRC/34/52/Add.1, para. 676) in retaliation for their legitimate human rights work at the Al Wissam Humanitarian Assembly, especially since these acts might be in reprisal for their cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights.

3. Japan

5. In the report on cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights (A/HRC/33/19, para. 25), reference was made to allegations of reprisals against Kazuko Ito. The Special Rapporteur on the situation of

^a OHCHR, “Honduras: Experto de la ONU advierte sobre el riesgo de impunidad en el caso de Berta Cáceres”, 6 October 2016.

human rights defenders, in his report on observations on communications, referred to the substantive response of the Government of Japan to the communication dated 30 May 2016 regarding allegations of surveillance of Ms. Ito, who had facilitated and organised meetings of the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression with representatives of civil society during his official country visit to Japan in April 2016 (see A/HRC/34/52/Add.1, paras. 399 and 400). These allegations stemmed from a magazine that reported information received through a leaked memo, allegedly produced by Japanese intelligence agency members, ordering the surveillance of Ms. Ito's movements ahead of the Special Rapporteur's visit to Japan. According to the Government's response, following Ms. Ito's inquiry and the communication sent from special procedures, the allegations were investigated and both the Public Security Intelligence Agency (PSIA) and the National Police Agency confirmed that they "had neither received such instructions nor conducted such research activities as were reported by the media."

4. Morocco

6. In the report on cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights of 16 August 2016, concerns were raised about Ms. El Ghalia Djimi, who was subjected to reprisals for seeking to engage with the Human Rights Council (see A/HRC/33/19, para 26). The Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, in his report on observations on communications, reiterated concerns that Ms. El Ghalia Djimi did not receive authorization to leave the country to travel to the thirty-first session of the Human Rights Council in Geneva (A/HRC/34/52/Add.1, para. 722). The mandate holder further expressed concern that the case of Ms. El Ghalia Djimi is not isolated, but is rather representative of a larger trend of reprisals, harassment and intimidation of human rights defenders. Information has since been received that Ms. El Ghalia Djimi was able to attend the thirty-second session of the Human Rights Council.

5. Uganda

7. The report on cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights of 16 August 2016 (see A/HRC/33/19) referred to the case of Douglas Bulongo, the Executive Director of the United Association for Peace and Development, who was subjected to reprisals in connection with his role in the submission of a report by the Lutheran World Federation to the universal periodic review on Uganda in November 2016. Mr. Bulongo was allegedly attacked on multiple occasions, including an instance on 1 March 2016 when a group of armed men broke into his home and led all his family members into one room. The armed men remained in Mr. Bulongo's home until he handed over all the workshop documents on the review process of Uganda (A/HRC/33/19, para. 31). On 20 March 2016 Mr. Bulongo was arrested and detained by police officers. He has reportedly since been granted bail by the court, yet still remains in hiding as he has allegedly been receiving threats by unknown persons.
